

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría en Derecho de la Empresa

**El problema de los procesos de intervención societaria aplicados por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a las compañías
sujetas a su control y vigilancia**

Mariela del Rocío Espinoza Hidalgo

Tutora: María Elena Jara Vásquez

Quito, 2020

Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional		
	Reconocimiento de créditos de la obra No comercial Sin obras derivadas	
Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia		

Cláusula de cesión de derecho de publicación de tesis/monografía

Yo, Mariela del Rocío Espinoza Hidalgo, autora de la tesis intitulada “El problema de los procesos de intervención societaria aplicados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a las compañías sujetas a su control y vigilancia”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magister en Derecho de la Empresa en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto, la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital u óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Fecha. Quito, 21 de febrero de 2020

Firma:

Abstract

Dentro de las atribuciones otorgadas al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, está la utilización de la intervención societaria en las compañías sujetas a su control y vigilancia, como una medida de corrección, la misma que permite precautelar los derechos de los socios o accionistas y terceros. No obstante, el abuso en la aplicación de esta medida, por parte del órgano de control, ha llevado a que se cambie la concepción de la misma convirtiéndose en una sanción.

Por lo mencionado muchos de los socios/accionistas han optado por presentar denuncias, para que a través de una inspección de control, se determine irregularidades tanto en el ámbito legal como en el contable, buscando que se sancione al representante legal con la remoción del cargo, al designar a un interventor.

La autoridad de control en la mayoría de los casos denunciados impone esta medida, con base a la facultad discrecional que posee y dependiendo del criterio del especialista asignado; sin embargo, la utilización de esta medida no siempre llega a poner fin a los conflictos societarios. Adicionalmente no se ha previsto sobre la temporalidad de la intervención dejando a criterio del interventor, establecer de acuerdo al cronograma presentado, el tiempo que podría durar esta medida, pudiendo cumplirse o no. Por lo que una de las consecuencias más drásticas, por el abuso de la aplicación de esta medida y podría ser la disolución de la compañía.

Por lo que es importante determinar en esta investigación que la intervención es realmente una medida temporal de aplicación excepcional, para que en base a las atribuciones conferidas en la ley, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se protejan los intereses de los accionistas, socios o de terceros que estén en evidente riesgo; y, en caso de que se generen conflictos societarios se promueva inicialmente la utilización de medios alternativos, difundiendo y aplicando lo dispuesto en el Reglamento de Centros de Mediación de la Superintendencia de Compañías, llegando como última alternativa a la intervención.

A Dios por permitirme lograr esta meta,

A mis ángeles Valentina y Carlitos porque son el mejor impulso en mi vida,

A mis padres, hermanos y sobrinos por sus palabras de aliento y el apoyo incondicional,

A Rosita por la ayuda brindada en esta etapa

Índice

Capítulo 1.....	13
Aspectos Generales de la Intervención Societaria	13
1.1 Definición de Intervención Societaria.....	13
1.2 Conflictividad Societaria entre accionistas o socios, administradores y autoridad	17
1.2.1 La affectio societatis y el interés social	17
1.2.2 Situaciones más frecuentes de conflictividad societaria	20
1.3 Mecanismos que bloquean la conflictividad societaria.....	31
1.4 Naturaleza jurídica de la Intervención Societaria	37
1.4.1 Que persigue la aplicación de esta medida.....	37
1.5 Análisis de las causas de Intervención Societaria	40
1.6 Mecanismos de Intervención Societaria.....	47
1.7 Clases de Intervención	50
1.7.1 Intervención Administrativa.....	50
1.7.2 Intervención Judicial	53
Capítulo 2.....	57
Los problemas de la Intervención Societaria en el Ecuador y posibles soluciones	57
2.1 La desnaturalización de la Intervención.....	57
2.2 El carácter correctivo y temporal de la Intervención	60
2.3 El desuso de métodos alternativos de solución de conflictos societarios	66
2.4 Posibles soluciones.....	69
Conclusiones	71
Recomendaciones	73
Bibliografía	75

Índice de Ilustraciones

Tablas

Tabla 1 Número de Denuncias que han concluido en Intervención	58
---	----

Tabla 2 Declaración de Intervención Vs. Levantamiento de Intervención.....	60
Tabla 3 Causales de Intervención.....	61
Tabla 4 Compañías Intervenidas según su Objeto Social.....	63
Tabla 5 Tiempo de duración de la medida en compañías intervenidas.....	65

Figuras

Figura 1 Flujograma del proceso de Intervención Societaria por vía administrativa.....	51
--	----

Introducción

La intervención fue incluida por primera vez en la legislación ecuatoriana a consecuencia de los conflictos societarios que se producían en las compañías, tales como los que afectaban el interés social, los que ponían en riesgo el patrimonio de la compañía o los que incrementaban la responsabilidad de la sociedad a consecuencia de las facultades que se les atribuía a los representantes legales en el Estatuto de la compañía.

La normativa aplicable a esta medida en un inicio reguló únicamente la designación de interventores¹, posteriormente se realizó una reforma en la que se estableció causales para intervenir a las compañías²; y una última reforma introducida en la Ley de Compañías sobre esta medida³ en la que se reúnen otras causales para que la Superintendencia ejerza sus facultades de intervención que se encontraban establecidas en diferentes disposiciones de la misma Ley, y que son las que actualmente se mantienen en la Ley de Compañías.

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, tiene la facultad de aplicación de la intervención societaria en las compañías sujetas a su control y vigilancia, como una medida temporal de aplicación excepcional; pero el abuso en la utilización de esta medida ha llevado a que se cambie la concepción de ésta, a una medida sancionadora que conlleva a la disolución y cancelación de las compañías.

Por esta razón, se busca analizar en el primer capítulo la naturaleza de la intervención, la conflictividad societaria y los mecanismos que conllevan a la búsqueda por parte de los socios o accionistas para la aplicación de esta medida, así como también el procedimiento administrativo que aplica el ente de control para declarar la intervención, con lo cual se podrá establecer si esta medida tiende a solucionar no solo las

¹Ecuador, *Decreto Supremo No. 1353-A Registro Oficial No. 720*, Quito, 31 de diciembre de 1974

²Ecuador, *Decreto Supremo No. 328 en Registro Oficial No. 794*, Quito, 2 de mayo de 1975

³Ecuador, *Ley de Compañías en Registro Oficial No. 312*, Quito, 5 de noviembre de 1999

irregularidades (contables principalmente) sino además los abusos que existen dentro de las compañías.

Por otro lado en la segunda parte de esta investigación se busca evidenciar con datos tomados de la Intendencia Regional de Quito, como el ente de control aplica esta medida y como se ha distorsionado el alcance que tiene la misma, analizando el número de compañías declaradas en intervención, las causales de mayor aplicación y la temporalidad de la medida; con el fin de establecer si se aplica de manera excepcional, analizando además, la posibilidad de acogerse a mecanismos alternativos, para evitar procedimientos largos dentro de la conflictividad societaria, dejando una puerta abierta para que no se concluya en intervención.

Capítulo primero

1. Aspectos Generales de la Intervención Societaria

En este capítulo se busca analizar a la figura jurídica de la intervención, lo cual abarcará el concepto de esta medida, su naturaleza jurídica; y, las diferentes causas que generan la aplicación de la misma; además se hará referencia a los conflictos societarios que conllevan a los socios o accionistas a requerir al ente de control la aplicación de la intervención, así como los diferentes mecanismos legales, establecidos en la Ley de Compañías para proteger a los socios, accionistas o terceros y al patrimonio de la compañía.

También se tratará en este capítulo la intervención administrativa y la intervención judicial que se encuentran reguladas tanto en la legislación ecuatoriana como en la legislación comparada argentina (en donde se ha desarrollado mejor esta medida), sus características; y, el procedimiento que se ha establecido en cada tipo de intervención.

1.1 Definición de Intervención Societaria

Dentro de la legislación ecuatoriana no se ha establecido una definición para la medida de intervención; sin embargo, en el Reglamento de Intervención emitido por la Superintendencia de Compañías se señala que: “La intervención es una medida administrativa de carácter temporal, resuelta por la Superintendencia de Compañías, que tiende a propiciar la corrección de irregularidades comprobadas, procura el mantenimiento del patrimonio de las compañías y evita que se ocasionen perjuicios a los socios, accionistas o terceros.”⁴

⁴Ecuador, *Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías, en Registro Oficial Suplemento No. 425*, Quito 3 de octubre de 2001, Art.1

La intervención societaria presenta varias características que a continuación se analizan:

- a) Es una medida que se la podría considerar como cautelar ya que busca proteger los derechos de los socios, accionistas o terceros, así como resguardar el patrimonio de la compañía.
- b) Es ejecutada por un interventor quien será de libre designación o remoción del Superintendente; el o los interventores podrán ser designados de dentro o fuera del personal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los mismos que no adquieren la calidad de representantes legales, administradores o fiscalizadores; su actuación se limita a la corrección de las irregularidades que causaron su designación, así como el mantenimiento del patrimonio de la compañía, con el fin de evitar perjuicios a los socios, accionistas o terceros; dichas actuaciones se encuentran establecidas en el artículo 353 de la Ley de Compañías y el artículo 10 del Reglamento de Intervención.
- c) Tiene el carácter de temporal, es decir, deberá durar el tiempo necesario para superar las observaciones que causaron la imposición de esta medida. En las disposiciones legales y reglamentarias se deja abierto el tiempo de duración de esta medida. Sin embargo, que una compañía esté intervenida por varios años infringe la temporalidad que la ley le otorga, además de generar problemas económicos para la compañía, que pueden llevarla a la disolución. Por lo contrario, por ejemplo en la legislación comparada argentina, sí se fija el tiempo de duración al momento de establecer la medida, que por lo general es graduable con relación a la gravedad de la o las irregularidades. En la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales se señala que se precisará el término de la intervención, el que solo puede ser prorrogado mediante información sumaria de su necesidad.⁵

⁵Argentina, *Ley de Sociedades Comerciales Ley N° 19.550*, en Decreto 841/84 B.O. 30 de marzo de 1984 Art.115

- d) Esta medida puede ser revocada por la autoridad que declaró la intervención, por cuanto la resolución que se emite no causa estado, por lo que la misma autoridad una vez que cuente con informes tanto económico como jurídico coincidentes puede levantar la intervención mediante otra resolución.
- e) La aplicación de esta medida a las sociedades mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debe tener un carácter excepcional, con el fin de precautelar los derechos políticos, financieros y patrimoniales de los socios o accionistas frente a hechos que se producen por actuaciones de los administradores de la compañía.
- f) La intervención tiene el carácter de reservada ya que busca proteger a la compañía a la cual se le ha aplicado esta medida, “para preservar la imagen de esta unidad de explotación económica, creadora de riqueza y fuente generadora de empleo e impedir que al tener conocimiento de la medida, sea fácil y negativamente aprovechada por parte de la competencia desleal.”⁶

Otra de las causas por las que se mantiene en reserva la aplicación de esta medida es porque la compañía que está intervenida puede verse afectada “por sus acreedores, que desinformados de la finalidad de la medida le cierran los créditos, considerando que han intervenido a la empresa por encontrarse en grave crisis patrimonial; y, aún más, por sus deudores, que consideran un negocio estúpido la intervención, para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones.”⁷ Por estas razones, la Autoridad, comunica la aplicación de esta medida a los administradores de la compañía, al interventor, a las entidades bancarias y registrales correspondientes, mediante notas reservadas.

⁶Roberto Caizahuano, “Intervención administrativa a las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías”, Revista de Derecho Societario No. 6, 56 en blog <http://aedssite.com/revista/autores_2.html>

⁷ Ibíd. pág. 56

No obstante, “en la práctica la reserva de la Intervención es un secreto a voces. Todos la conocen.”⁸ Por su parte el doctor Roberto Salgado Valdez manifiesta que “en un anteproyecto de reformas a varias leyes, entre las que se encontraba la de compañías, se propuso en abril del 2010, una reforma al actual artículo 358, en el que se incluía lo siguiente:

Cualquier persona interesada podrá solicitar a la Superintendencia de Compañías que le informe si una Sociedad sujeta a su control está o no intervenida, limitándose la Superintendencia a contestar afirmativa o negativamente, determinando, en su caso, la fecha en que se dispuso la intervención y el nombre del Interventor o Interventores, sin más detalles. La persona que pida tal información deberá justificar en su solicitud, con la correspondiente precisión, el interés que la vincula a la Compañía respectiva, y reconocer su firma en la misma ante el Secretario General de la Institución. La solicitud mencionada podrá presentarse varias veces, con los mismos requisitos, para actualizar la respuesta anterior.⁹

Dicha propuesta hubiera sido beneficiosa por un lado para precautelar los derechos de terceros, los mismos que en la actual Ley de Compañías se encuentran desamparados, al desconocer la declaración de intervención de una compañía; y, pueden ser lesionados el momento en que se contrate con el representante legal sin el visto bueno del interventor, ya que las actuaciones realizadas carecerían de validez; y, por otro lado para precautelar a la compañía intervenida en caso de que los deudores de la misma busquen evadir el cumplimiento de sus obligaciones.

- g) La intervención y la disolución no son estados que se oponen, así lo señala el artículo 25 del Reglamento de Intervención¹⁰, por lo que la declaración de intervención y designación de interventor es procedente en cualquier estado jurídico de una compañía, ya que por el carácter protectivo de la medida, no afecta ningún derecho dentro de la sociedad

⁸ Roberto Salgado Valdez, “*Tratado de derecho empresarial y societario*”, t V (Quito, 2015), pág. 131

⁹ *Ibíd.*, pág. 131

¹⁰ Ecuador, *Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías*, Art. 25.- No es incompatible el estado de intervención con el de liquidación. Por no serlo, bien puede disponerse la disolución y liquidación de una compañía intervenida, sin perjuicio de que continúe su intervención. Es también posible que a una compañía en liquidación, si las circunstancias ameritan, se la someta además al estado de intervención.

Con base a las características anteriormente señaladas, es evidente que la medida de intervención no debe afectar la personalidad jurídica o las operaciones y transacciones de la compañía, por lo cual es errada la idea que la consecuencia de la aplicación de esta medida es la disolución y liquidación de la misma; por lo contrario, si por parte del representante legal de la compañía no existen las facilidades para que el interventor pueda actuar conforme a las responsabilidades otorgadas o no se paguen los honorarios del mismo sí se puede declarar de oficio por parte de la autoridad la disolución de la compañía intervenida.¹¹

1.2 Conflictividad Societaria entre accionistas o socios, administradores y autoridad

1.2.1 La *affectio societatis* y el interés social

Previo a analizar la conflictividad societaria frente a la cual suele emerger la intervención, es necesario señalar la importancia que las sociedades comerciales han ido adquiriendo en el mercado económico, por cuanto las personas han buscado una manera organizada de asociarse, con el fin de realizar una actividad económica específica y a su vez precautelar el patrimonio que poseen, limitando su responsabilidad. Por esta razón al existir voluntad de las partes para asociarse de manera estructurada (a través de cualquier tipo de sociedad anónima o limitada), se suscribe el contrato social, el mismo que genera derechos y obligaciones entre los asociados; dicha voluntad se la conoce como la “*affectio societatis*”.

Para el doctor Roberto Salgado Valdez, la *affectio societatis* constituye el ánimo de asociarse y un elemento decisivo para la configuración y permanencia del contrato de sociedad, por lo que este elemento lo distingue del contrato de mandato. Dentro de las características de la *affectio societatis* se menciona las siguientes: “el trato igualitario entre socios basándose en la buena fe, la lealtad recíproca, la voluntad de colaborar participando

¹¹Ibíd., Art. 15 y 19

en los órganos de administración; y, la participación tanto de las utilidades como de las pérdidas.”¹²

Ligado a este elemento esencial para la celebración del contrato de sociedad, está el interés social que representa el principio societario básico para el funcionamiento de una compañía. Dentro de la doctrina societaria se han dado varias interpretaciones al interés social entre las principales podemos mencionar:

- a) Para Halperin el interés social “radica en la realización de cuanto es idóneo para satisfacer el objeto social y que se resuelve en una satisfacción proporcional del interés individual de cada socio.”¹³ Además menciona que al interés social se lo debe vincular con la obligación de corrección en las relaciones intersubjetivas, como el trato igualitario para todos los accionistas; 2) el ejercicio de buena fe, 3) el ejercicio abusivo de los derechos.”¹⁴
- b) Por otro lado Zaldivar entiende que el interés social es el beneficio de los socios y de la sociedad en su conjunto, a los fines del cumplimiento del objeto y con prescindencia del interés particular de los primeros.”¹⁵
- c) Sasot Betes relaciona a esta noción con la *affectio societatis*, concepto abstracto que postula con fuerza de axioma que los intereses de la persona jurídica nacida por la agrupación de las voluntades individuales que le dieron existencia, deben estar por encima de cada uno de los intereses individuales singularmente considerados”¹⁶
- d) Manovil considera al interés social como “aquel interés común derivado del riesgo y de la vocación a soportar las pérdidas y a participar de las utilidades,

¹² Alfredo L. Rovira, “*Pactos de Socios*”, (Buenos Aires 2006), 121

¹³ *Ibíd.* pág. 67

¹⁴ *Ibíd.* pág. 68

¹⁵ *Ibíd.*

¹⁶ *Ibíd.* pág. 69

fundamentando de la igual calidad de derechos, forma parte de la causa-fin de la sociedad.”¹⁷

En la doctrina societaria se mencionan dos teorías que buscan dar una idea más clara de lo que es el interés social:

- teoría contractualista considera al interés social como un “concepto que se encuentra ínsito en la estructura de la sociedad y que, por ende, corresponde solo a los socios.”¹⁸

En esta teoría el interés que es común de los socios, busca la obtención del máximo de ganancias, basándose en la lealtad de actuación de los socios y administradores; dejando como último a la sociedad.

- teoría institucionalista considera al interés social como superior a los socios; “esta teoría considera que el interés social es un interés propio de la empresa en sí misma, considerando la multiplicidad de intereses que giran en derredor de las sociedades: intereses de los socios, de los trabajadores, de la comunidad en general, del Estado.”¹⁹

Por otro lado, en esta teoría se da jerarquía superior a la empresa frente a los intereses de los socios, otorgando mayores atribuciones a los administradores, para que tengan una libertad de actuación.

De todo lo mencionado se desprende que la *affectio societatis* es un elemento que debe permanecer a lo largo de la vida de la sociedad, ya que representa el consentimiento de la partes para formar y mantenerse asociados, dicha voluntad se encuentra totalmente ligada al interés social, por lo cual al momento que se quebranten cualquiera de estos dos elementos, que representan la voluntariedad de la partes, la lealtad o buena fe de las decisiones tomadas en asamblea o las actuaciones de los administradores en beneficio de

¹⁷Ibíd. pág. 71

¹⁸ Alfredo L. Rovira, “*Interés Societario*”, (Buenos Aires, 2006), 49

¹⁹Ibíd., pag.55

los socios o accionistas que tienen control, constituyen la base para el inicio del conflicto societario.

1.2.2 Situaciones más frecuentes de conflictividad societaria

La conflictividad societaria se desarrolla en una compañía “cuando dos o más miembros de una sociedad comercial, participan en un enfrentamiento respecto de cualquier decisión que impacte en la organización o en el desarrollo de la empresa.”²⁰

Dicha conflictividad se presenta en diferentes grados de intensidad, el cual estará dado por: “i) el grado de disconformidad de los partícipes ante una situación determinada; ii) la sorpresa causada por esa situación; y iii) la urgencia con que sea necesario alcanzar una solución para el problema.”²¹

Entre las causas que generan la conflictividad societaria están:

1. Los disensos entre los socios o accionistas ya sea por el desconocimiento de los derechos que estos tienen en la sociedad o por el incumplimiento de las obligaciones generadas por efecto de la suscripción del contrato de sociedad.²²

²⁰Arturo C. Giovenco, “*Conflicto Societario*”, en Eduardo M. Favier Dubois, *Tipología y Propuesta de Abordaje en Negociación, Mediación y arbitraje en la empresa familiar* (Buenos Aires, 2012), 151

²¹Ibíd.

²²Alfredo L. Rovira, “*Interés Societario*”, 55. “Al momento vale recordar los principales derechos y obligaciones de los socios o accionistas: a) Derechos Políticos que se conforma por: el derecho de información, el derecho de voz: que a su vez abarca: derecho a la participación en las asambleas y pedir su convocatoria; derecho a intervenir en la elección de integrantes de los órganos sociales; c) derecho de impugnación de los actos sociales, y d) derecho de ejercer las acciones de responsabilidad; el derecho de voto; y, el derecho de receso. b) Derechos financieros que se conforma por: el derecho a que la gestión social se encamine a la obtención de beneficios, el derecho al reparto anual, el derecho al dividendo ya acordado; y, el derecho a la cuota de liquidación. c) Derechos patrimoniales que se conforma por el derecho al mantenimiento de la integridad de su participación; y, el derecho de negociar, disponer y gravar la partes sociales”

Entre las principales obligaciones que tienen que cumplir los socios o accionistas, están: cumplir con las aportaciones, responder ilimitadamente frente a acreedores, soportar pérdidas, someterse a las decisiones de la mayoría, obrar con lealtad tanto con la sociedad como con los demás socios o accionistas, en el caso de accionistas extranjeros cumplir anualmente con la entrega de la certificación de existencia legal y la lista de sus socios o accionistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo innumerado después del 221 de la Ley de Compañías.

2. La relación entre socios o accionistas y administradores ha dado origen a los denominados problemas de agencia, los cuales surgen de la separación de la propiedad y control de la compañía; este conflicto societario nace cuando aparece un nuevo agente (el administrador) que se apropia del control de los recursos empresariales y posee un gran peso en la fijación de los objetivos de la empresa, frente al desplazamiento de los socios o accionistas.

Por lo cual la diferencia de intereses entre la propiedad o el riesgo moral de los socios o accionistas y la gestión o actuaciones de los administradores genera los problemas de agencia que la doctrina ha dividido de la siguiente manera:

- a. El esfuerzo insuficiente o shirking: “El problema del shirking en la empresa se basa en la tendencia natural del directivo a poner menos empeño en su trabajo (por tanto, menor esfuerzo para crear valor) de lo que el accionista espera de él. Se manifiesta en aspectos tales como elusión de responsabilidades, dejación o incumplimiento de funciones, etc.”²³
- b. El cash flow libre: éste representa las ganancias obtenidas por la compañía y el conflicto que surge cuando los socios o accionistas esperan la distribución del dinero como dividendos, mientras que el administrador busca el financiamiento de nuevos proyectos de inversión.
- c. La miopía directiva: en la cual “las decisiones de la gerencia no vienen determinadas por el largo plazo, sino que ésta tiene muy en cuenta el plazo temporal que va a permanecer en la empresa y las compensaciones que obtendrá. De ahí que el directivo prefiera emprender proyectos cuyo coste sea reducido y cuyos beneficios se realicen lo antes posible,”²⁴ a lo contrario de los socios o accionistas quienes buscan maximizar el valor patrimonial de la compañía a largo plazo.

²³ María Belén Lozano García, Alberto de Miguel Hidalgo; y, Julio Pindado García “*El conflicto accionista-directivo: problemas y propuestas de solución*”, 2 en blog <<http://www.revistasice.com/>>

²⁴ Ibid, 3

- d. El riesgo: su concepción se divide entre los accionistas y los administradores; no obstante, la limitación de actuación al administrador contribuye a agudizar el conflicto de agencia mencionado.
- e. La seguridad en el empleo: los administradores tienen un cierto margen de seguridad en su puesto de trabajo, ya que la formación y adaptación de un nuevo gerente lleva consigo un costo elevado, por lo cual los accionistas deberán soportar por un cierto periodo de tiempo gestiones ineficientes por la imposibilidad de evaluar a corto plazo.
- f. Intereses privados: esta divergencia se refiere al distinto uso de los activos que hacen ambos agentes empresariales.²⁵

Con el fin de buscar mecanismos de control para que la compañía no se aleje de sus objetivos prioritarios y además se evite caer en esta conflictividad, se ha establecido diferentes medidas que permitan establecer una alarma para mitigar los problemas mencionados, entre las principales medidas está el establecer un consejo de administración que será un mecanismo de control interno; y, la participación de los administradores en el capital de la compañía, lo que generara sin duda un incentivo para desarrollar actividades creativas en beneficio de la compañía.

3. Otra situación de conflictividad societaria es la actuación de los administradores, quienes al estar dotados de amplias facultades, realizan actos contrarios a la ley, al estatuto social; y, a la decisión de la junta general; así como también, cuando actúan sin la debida diligencia con la que deben desempeñar su cargo con abuso del poder concedido. Por otro lado, “mientras el administrador ponga toda su diligencia en la obtención del interés social su actuación no será responsable, aunque, a pesar de su esfuerzo, no se obtengan beneficios por culpa de los llamados daños indirectos. La decisión del administrador se circunscribe a la elección de los

²⁵ Ibid, 6

medios adecuados, sin que ello suponga la obtención del resultado económico deseado o apetecido.”²⁶

Previo a analizar la responsabilidad que nace de la actuación de los administradores, es importante señalar que en la doctrina societaria se ha establecido dos teorías que explican de mejor manera el concepto de administradores, la primera teoría es de concepción tradicional a lo contrario de la segunda teoría que es de concepción contemporánea:

- Teoría de la representación: los administradores ocupan la posición de un representante legal de la persona jurídica – sociedad y, en esa calidad, se consideran facultados para cumplir ciertos deberes legales y estatutarios.
- Teoría organisista: la gestión social se cumple con funcionarios a quienes la ley y el contrato les concede la facultad de administrar la sociedad dentro de su objeto social y conforme a la competencia otorgada.²⁷

De lo señalado se desprende que los representantes legales están habilitados para hacer presente a la sociedad en todas las relaciones con terceros, en que ésta deba comprometerse para el desarrollo de la actividad acordada. Así, la actividad irrestricta de los representantes legales constituye la regla general y las limitaciones a su actuación son la excepción que requiere pacto expreso.²⁸ Los administradores para ejercer el cargo encomendado son llamados a actuar dentro del principio general de la debida diligencia, por lo cual deberán cumplir con los siguientes deberes:

- a) Deber de buena fe: de esta conducta parten los demás deberes que asume el administrador. “La observancia irrestricta de él no solo implica tan sólo la actuación diligente o libre de culpa, sino también la actitud leal en el desempeño de sus funciones.”²⁹

²⁶ Josep Farrán Farriol, “*La responsabilidad de los administradores en la administración societaria*”, (Barcelona, 2004) edición electrónica

²⁷ Francisco Reyes Villamizar “*Derecho Societario*” tomo I Editorial Temis S.A., Bogotá 2006, pag, 563

²⁸ *Ibíd.*, pág. 580

²⁹ *Ibíd.*, 587

- b) Deber de diligencia y cuidado: “Se trata, pues, de un patrón de conducta más estricto, que trae consigo una evaluación seria e informada de las principales opciones de que dispone el administrador en el momento de tomar determinaciones”³⁰. No obstante se debe tomar en cuenta que el deber de cuidado no implica que la decisión de negocios tenga que ser acertada en términos de beneficios económicos para la compañía, sino más bien implica la obligación de la elección de medios acertados para el desempeño de la actividad empresarial, con lo cual no generaría responsabilidades para el administrador.

- c) Deber de lealtad: “Este se refleja en una serie de obligaciones específicas de acción u omisión, que se orientan a proteger secretos de la sociedad, la abstención de actuaciones que resulten conflictivas con las de la compañía, el respeto por las oportunidades de negocios en cabeza de la sociedad.” Además, el deber de lealtad también guarda relación entre los administradores y asociados, cuando “el administrador tenga el deber de considerar la situación de todos o de algunos de los socios en el momento de tomar decisiones, cuya adopción pueda causarles perjuicio.

Por otro lado en la legislación ecuatoriana, la Ley de Compañías en el artículo 263 ha establecido de manera específica los deberes que deben cumplir los administradores, los cuales contemplan algunas de las funciones más importantes que la ley les otorga, por lo cual la violación de dichas funciones genera tanto conflictividad societaria como responsabilidad.

La responsabilidad imputable a los administradores puede ser de naturaleza contractual o extracontractual. La responsabilidad contractual “supone la violación de un deber concreto que existe específicamente entre una persona determinada y otra persona también determinada y que constituye lo que propiamente se llama una obligación, independiente de la fuente que dio origen a esa obligación, pudiendo ser la ley o el

³⁰ Ibídem, 589

contrato. Por otro lado, la responsabilidad extracontractual implica la violación del deber general de no causar daño a otro, que existe en beneficio de todas las personas.”³¹ En consecuencia para configurar la responsabilidad contractual o extracontractual de los administradores deberá reunir los elementos requeridos en el derecho común que son:

1. Elemento perjuicio: se configura cuando se ha cometido un acto ilícito, antiestatutario o negligente provocando un perjuicio a la compañía, como por ejemplo una pérdida económica, un daño; o la privación de una ganancia.
2. Elemento culpa: se presume la existencia de este elemento cuando el administrador ha realizado hecho o actos con violación a la ley o el contrato social.
3. Elemento nexo causal: “es el ligamen de causa a efecto entre la acción humana y el daño producido. Los administradores será responsables por sus ilícitos, antiestatutarios o negligentes siempre que estén relacionados causalmente al perjuicio sufrido por la sociedad o por los terceros³².

Por otro lado, es importante mencionar que los administradores pueden exonerarse de la responsabilidad siempre y cuando de manera expresa se opusieren a la adopción de la resolución que causa la responsabilidad y no la ejecuten.³³ Así mismo los administradores que comenten la violación de la ley o de los estatutos, sin dolo o culpa, no contraen responsabilidad alguna. Puede violarse una norma como consecuencia de una interpretación errónea, posible por su texto oscuro o ambiguo. El error cometido sobre la cuestión jurídicamente controvertida no arrastra a responsabilidad de los administradores.³⁴

El poder otorgado a los administradores está acompañado de la responsabilidad societaria, la cual nace de la actuación de éstos y se puede formar en dos ámbitos de

³¹ Nuri Rodríguez Olivera, “Responsabilidad civil de los administradores de sociedad anónimas” (Montevideo 1973), pág. 199

³² *Ibíd.*, pag. 199

³³ Ecuador, *Ley de Compañías*, Art. 264.- a responsabilidad de los administradores por actos u omisiones no se extiende a aquellos que, estando exentos de culpa, hubieren hecho constar su inconformidad, en el plazo de diez días a contarse de la fecha en que conocieron de la resolución y dieron noticia inmediata a los comisarios.

³⁴ *Ibíd.*, pág. 199

responsabilidad: “la responsabilidad por daños producidos al patrimonio de la sociedad, exigible por ella misma en méritos de la acción social; y la responsabilidad por daños causados a los socios o a terceras personas, exigible por éstos a través de la acción individual de responsabilidad.”³⁵

Con base a lo mencionado los socios o accionistas pueden exigir responsabilidad a los administradores, en nuestra legislación si se regula la responsabilidad de los administradores, pero de una manera ambigua, en donde se establece que la responsabilidad es derivada de las obligaciones que la ley y el contrato social le imponga.³⁶ Sin embargo, la doctrina societaria habla de la acción de responsabilidad de los administradores “que tiene como finalidad la reconstrucción del patrimonio social dañado por una actuación, no solo ilícita del administrador, sino realizada con malicia, abuso de facultades o negligencia grave.” Para exigir responsabilidades al administrador culpable es necesario de los siguientes requisitos:

- a) Una acción u omisión ilícita.
- b) Que la citada acción u omisión se hubiere realizado con malicia, abuso de facultades o negligencia grave.
- c) La producción de un daño.
- d) Que la acción u omisión hubiere sido realizada por el administrador.
- e) Relación de causalidad entre el daño causado y la conducta del administrador³⁷

En la legislación argentina si se encuentra regulada la acción de responsabilidad de los administradores y la divide en dos clases de responsabilidad la social y la individual.

La acción de responsabilidad social contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adaptado aunque no conste en el orden del día; y, la acción individual de responsabilidad, es aquella acción que pueden ejercer de forma individual socios y terceros –incluidos entre éstos los acreedores–, que hayan sido lesionados directamente en su patrimonio por un acto doloso, culposo, negligente o que infrinja el ordenamiento al que deben

³⁵Sergio Llebaría Samper y Núria Ginés Castellet, “*Derecho de sociedades*”, t. I (Barcelona, 2008) edición electrónica

³⁶Ecuador, *Ley de Compañías*, Art. 255

³⁷Josep Farrán Farriol, “*La responsabilidad de los administradores en la administración societaria*”, (Barcelona, 2004) edición electrónica

sujetarse los administradores, y no sea un mero reflejo del daño causado por éstos en el patrimonio de la sociedad.³⁸

La Ley de Compañías ha establecido de manera taxativa en el artículo 126 las faltas que acarrearán responsabilidad civil o penal a los administradores que las cometan.³⁹ Por lo cual cuando se recibe denuncias en las cuales se determinan faltas graves de los administradores las mismas que han generado conflictividad societaria y han conllevado a la intervención de la compañía, se emite a la par una resolución con la que se multa al administrador de manera personal. (de acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 25 de la Ley de Compañías)

4. La última de las causas de conflictividad societaria es el abuso de posiciones en las decisiones de la junta general. En esta causa de conflictividad societaria se puede dar de tres tipos: abuso de mayorías, abuso de minorías y abuso de posición paritaria, situaciones que se analizan a continuación:

a) Abuso de Mayoría:

El abuso de mayoría se genera en la decisión tomada en junta general, la cual quebranta el interés social, y beneficia a quienes toman dicha decisión. Para Dominique Vidal, hay abuso de mayoría cuando se produce una vulneración del equilibrio jurídico de los socios o accionistas.

La vulneración del equilibrio se puede dar de dos formas:

- Vulneración de la igualdad interna: que ocurre cuando se lesiona la igualdad de derechos reconocidos por los estatutos a todos los asociados.

³⁸Argentina, *Ley de Sociedades*, Art. 134 y 135

³⁹Ecuador, *Ley de Compañías*, Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes faltas responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudieren tener: a) Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía que, conforme a la ley, deban inscribirse en el Registro Mercantil; o dar datos falsos respecto al pago de las aportaciones sociales y al capital de la compañía; // b) Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para alcanzar la inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución del capital, aún cuando la inscripción hubiere sido autorizada por el Superintendente de Compañías y Valores; // c) Formar y presentar balances e inventarios falsos; y, // d) Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía.

- Vulneración de la igualdad externa: que se presenta cuando el accionista o socio minoritario es privado de ventajas que le son concedidas al accionista o socio mayoritario, quien no las recibe por ser asociado, sino por causa de una relación externa al pacto social.⁴⁰

Este abuso de mayoría se da por ejemplo en el nombramiento de administradores, o de los miembros de los órganos de fiscalización; quienes luego deberán someterse a las órdenes de esta mayoría, así mismo, se ve este abuso en reformas estatutarias que afectan el patrimonio de la compañía como aumentos de capital, escisiones, fusiones, transformaciones, disminuciones de capital los cuales se utilizan para diluir el porcentaje de participación de los socios o accionistas⁴¹; o, en reformas estatutarias donde se amplían atribuciones a los administradores, el tiempo de duración en el cargo, o se limita la forma de convocar.

La doctrina ha señalado tres clases de abuso del poder mayoritario, y estos son:

- Decisiones contrarias al interés social motivadas por razones extra societarias
- Decisiones que rompen con la igualdad de los accionistas en beneficio de la mayoría.
- Decisiones que encubren la lesión de derechos esenciales de los accionistas y cuyo fin es lograr el “estrangulamiento de la minoría.”⁴²

De lo mencionado se evidencia que el abuso de mayoría es una violación a la lealtad y buena fe de asociación, por un exceso de poder. Sin embargo, existen formas de bloquear este abuso, a través del ejercicio del derecho de separación o de impugnaciones a las decisiones sociales tomadas en junta general, sobre estos derechos se tratara más adelante.

b) Abuso de Minoría

⁴⁰Carlos Velásquez Restrepo, “*Sobre el abuso del derecho en materia de sociedades*”, 11 en blog <<https://www.carlosavelasquez.com/descargas/sobre-el-abuso-del-derecho-en-materia-de-sociedades>>

⁴¹ Tanto en la escisión, transformación o fusión, la Ley de Compañías ha previsto un retiro voluntario cuando el socio o accionista se sienta afectado, beneficiándose con reembolso de las acciones o participaciones que le corresponde que pierda el interés de continuar asociado; no así en los casos de aumento de capital ya que es un acto idóneos para ejecutar estrategias con las que se diluyen los porcentajes accionarios de los socios o accionistas minoritarios, incluso aunque se respete el derecho de suscripción preferente. En este tipo de aumento de capital abusivo (aprobado por la mayoría) se alega la violación al derecho de información de los socios.

⁴²Carlos Velásquez Restrepo, “*Sobre el abuso del derecho en materia de sociedades*”, 11- 12

El abuso del derecho por la minoría en palabras del doctor Hernando Ruiz López, se presenta cuando se busca “obstaculizar todas las decisiones sociales y perjudicar la dinámica empresarial simplemente como reacción a conflictos emocionales.”⁴³ De la misma forma como sucede el abuso de la mayoría, se producen maniobras de la minoría que pueden afectar el normal funcionamiento de la sociedad, específicamente en la adopción de acuerdos donde es necesaria su voluntad de participación, con el fin de preservar a la compañía.

De lo mencionado se puede señalar que “el marco societario más propicio para el desarrollo de este tipo de disfunciones es el ámbito de las sociedades cerradas, por su estructura básicamente familiar y la mayor facilidad para ejercer en consecuencia los derechos de minoría en sentido estricto, no por ello quedan al margen las sociedades abiertas o cotizadas, donde, si bien es más difícil el ejercicio de estos derechos, habida cuenta de la acusada dispersión del accionariado y de los elevados porcentaje de capital que se requieren para ello, nada impide tampoco el ejercicio abusivo de los denominados derechos individuales.”⁴⁴

La doctrina ha establecido dos clases de abusos de minoría; la primera clase corresponde a los abusos positivos o iniciativas calificadas abusivas, y, la segunda clase corresponden a los abusos negativos o votos abusivos. La primera categoría se relaciona con el uso de mecanismos legales de protección tanto para los intereses individuales como para los intereses sociales, con el fin de controlar el poder de la mayoría. El uso de estos mecanismos debe ser de manera reiterada y en ocasiones sin reunir el porcentaje legal establecido, obstruyendo así la marcha de la sociedad y la gestión de los administradores. Los mecanismos que se utilizan en esta clase de abusos son el derecho de impugnación a los acuerdos sociales y el derecho a la información para diferimientos de juntas. La segunda categoría está integrada por conductas de bloqueo u oposición sistemática e injustificada a la adopción de decisiones fundamentales para la supervivencia o

⁴³Ibíd. 14

⁴⁴ Pedro J. Rubio Vicente, “Una aproximación al abuso de minoría en la sociedad anónima”, en Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica Derecho Comercial y de las Obligaciones No. 37 (2004-A): 16

perspectivas económicas de la sociedad. Los votos abusivos de la minoría no tienen beneficios económicos, a comparación del abuso de mayoría; sino todo lo contrario, en este tipo de bloqueo sistemático aplicado por la minoría por ejemplo se busca tomar acuerdos que hostiguen la actuación de los administradores o que impidan modificaciones estatutarias en donde la Ley haya establecido mayorías reforzadas.

c) Abuso de posición paritaria

Este abuso se presenta cuando el capital se ha dividido en partes iguales, generándose un bloqueo para la toma de decisiones. Por lo general el abuso de posición paritaria termina con el elemento esencial de contrato de sociedad que es la *affectio societatis*. “Es un escenario propicio para que ocurran situaciones de bloqueo entre los órganos sociales, sacando provecho indebido alguno de los grupos.”⁴⁵

Cuando se produzca este tipo de abuso, el estado de la compañía deberá permanecer así de manera indefinida; ya que “al ser dos socios, la ausencia de uno de ellos puede conllevar a la parálisis del máximo órgano social y da lugar a la disolución y liquidación del ente societario”.⁴⁶

Al contrario de nuestra legislación donde no existe ningún tipo de solución para el abuso de posiciones paritarias, la legislación colombiana ha dado dos tipos de salida al abuso de esta posición: el primero caso la Superintendencia de Sociedades establece que cuando exista un abuso de posición paritaria, “cualquier socio puede pedir que se declare la disolución y liquidación de la compañía por vía judicial”⁴⁷; y, el segundo caso, según disposición legal, se determina que “en caso de empate se dejará la suerte”⁴⁸. Al respecto, se ha dicho que “tanto la alternativa extrema propuesta por la Superintendencia de Sociedades, como la aplicación analógica propuesta, son salidas que en últimas no benefician a la sociedad ni a sus asociados, toda vez que, en el primer caso, ante la

⁴⁵Ibíd., 17

⁴⁶Ibíd.

⁴⁷ Colombia, *Código de Procedimiento Civil*, Art. 627

⁴⁸ Colombia, *Código de Comercio*, Art. 197

indefensión, se procedería a disolver y liquidar el vínculo social y en el segundo caso, se dejaría a un factor para nada objetivo, como es la suerte, la toma de una decisión que en este tipo de asuntos suele ser trascendental para el futuro de la empresa social.”⁴⁹

Por lo tanto el abuso de minorías al igual que el de mayorías quebranta el interés social, buscando satisfacer el interés personal del socio o accionista, quien a lo hace a través de un bloqueo del normal funcionamiento de la sociedad. Por lo cual podría desencadenar este tipo de actuaciones en la aplicación de la intervención societaria. Por esta razón los socios o accionistas que se sienten perjudicados presentan denuncias ante el órgano de control como único camino para protegerse y bloquear las actuaciones abusivas que se estén produciendo en la compañía.

1.3 Mecanismos que bloquean la conflictividad societaria

En la Ley de Compañías se han establecido tres mecanismos que pueden utilizar los socios o accionistas sean mayoritarios o minoritarios, cuando sientan afectados sus derechos, estos mecanismos pueden ser utilizados antes de iniciar un proceso de intervención y estos son:

1. Derecho de impugnación
2. Acción de Nulidad
3. Derecho de separación

A continuación se realizará un breve análisis de cada uno de los mecanismos enunciados.

1. Derecho de Impugnación

El derecho de impugnación de acuerdos sociales es un mecanismo procesal a través del cual se cuestiona la validez de un acuerdo y permite “cautelar la correcta formación de la voluntad social que, como se sabe, es distinta e independiente de la voluntad de los accionistas que forman la junta general, derecho que le es conferido al accionista que no

⁴⁹ Pedro J. Rubio Vicente, “Una aproximación al abuso de minoría en la sociedad anónima”, 17

contribuyó a su formación, ya sea porque voto en contra del acuerdo dejando constancia en acta de su oposición, porque no estuvo presente en la junta en la que se aprobó el acuerdo o porque fue privado ilegítimamente de su derecho de voto.”⁵⁰ Este derecho de impugnación es complementario al derecho de voto y al derecho de información.

Esta figura legal se encuentra regulada en la Ley de Compañías en los artículos 215 y 216, lo podrán aplicar los socios o accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital y se debe presentar ante un Juez de lo Civil del domicilio de la compañía.⁵¹ Es importante señalar que la impugnación de acuerdos sociales está sujeta a plazos de caducidad, estableciéndose en la Ley 30 días a partir de la fecha del acuerdo, para que se pueda ejercer dicho derecho.

Sobre este derecho de impugnación se puede enumerar las siguientes características:

1. Cabe sobre resoluciones adoptadas por la junta que están contrarias a la ley o al estatuto
2. Busca la nulidad de la resolución (acuerdo societario)
3. Suspende la ejecución de la resolución impugnada
4. Da responsabilidad ilimitada a quienes intervinieron en la decisión tomada en junta.

Es importante señalar que los acuerdos susceptibles de impugnación son aquellos acuerdos anulables, es decir aquellos que adolecen de nulidad relativa ya que atentan contra el estatuto, el pacto social o el interés social. Por otro lado los acuerdos nulos son aquellos

⁵⁰Oswaldo Hundskopf Exebio, “*El derecho de impugnación de acuerdos de juntas generales de accionistas en la nueva Ley General de Sociedades y su ejercicio a través de acciones judiciales*”, (Ius Et Veritas), 90

⁵¹Ecuador, *Ley de Compañías* Art. 215.- Los accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social podrán impugnar, según las normas de esta ley y dentro de los plazos que establece, los acuerdos de las juntas generales o de los organismos de administración que no se hubieren adoptado de conformidad con la ley o el estatuto social, o que lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la compañía. Se ejercitará este derecho conforme a lo dispuesto en el Art. 249.

Artículo 216.- La acción de impugnación de los acuerdos o resoluciones a que se refiere el artículo anterior deberá ejercitarse en el plazo de treinta días a partir de la fecha del acuerdo o resolución. // No queda sometida a estos plazos de caducidad la acción de nulidad de los acuerdos contrarios a la Ley. Las acciones se presentarán ante la jueza o juez de lo civil del domicilio principal de la compañía, quien las tramitará verbal y sumariamente. Las acciones serán deducidas por una minoría que represente por lo menos la cuarta parte del capital social. // De la sentencia dictada cabe deducir los recursos que señala la ley.

contrarios a la ley, acogándose estos acuerdos a la acción de nulidad que se analizará más adelante.

Los presupuestos formales que se deben cumplir para recurrir ante el juez, están establecidos en el artículo 249 de la Ley de compañías y son los siguientes:

“*legitimación activa del impugnante*, que ha sido limitada a los socios, los integrantes de los órganos sociales, y a la autoridad de control;

- a) *Derecho concedido al ausente o al disidente*, excepto que su voto fuera anulable por vicio de la voluntad.
- b) *Juez competente*, que es el del domicilio social, congruente con los principios generales vigentes en el ordenamiento (inscripción, remoción de administradores, intervención judicial, acciones de responsabilidad, etc.)
- c) *Medida cautelar*, consiste en la posibilidad de suspender preventivamente la ejecución del acto impugnado, siempre que se reúnan los requisitos generales de procedencia procesal para estos casos: peligro en la demora, daño grave, contracautela, a los que se debe agregar uno de carácter societario: que no medie perjuicios para terceros;
- d) *Legitimación pasiva* de la sociedad, como destinataria natural de la acción, excepto cuando se demanda también a quienes votaron favorablemente la decisión cuestionada y resulta solidariamente responsables de daños y perjuicios.”⁵²

En la legislación colombiana sí se ha previsto como evitar el abuso en la toma de decisiones que generan conflictividad societaria, a través de la Ley General de Sociedades y por la Ley 1258 del 2008. En la Ley General de Sociedades se hace referencia al derecho de impugnación sobre acuerdos que lesionen el interés social, de acuerdo a lo que señala el artículo 139 de la mencionada ley: “Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la junta general cuyo contenido directo o indirecto de uno o varios accionistas, los

⁵² Horacio Roitman, “*Impugnación a las decisiones assemblearias*” en Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica Derecho Comercial y de las Obligaciones año 17 No.97-102 (Buenos Aires, 1984):103

intereses de la sociedad...”⁵³ Sin embargo, dentro de este derecho de impugnación no existen limitaciones para interponerlo, dejando abierta la posibilidad de que cuando un socio se sienta vulnerado sus derechos, (sin importar el bienestar de la sociedad o el interés colectivo) pueda interponer este recurso. Por otro lado en la Ley 1258 del 2088 en el artículo 43 se considera votos abusivos tanto de la mayoría, minoría o paridad, determinándose como abusivo el voto que es ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. La Superintendencia de Sociedades tiene facultad jurisdiccional para declarar la nulidad absoluta de la decisión adoptada, así como la indemnización de perjuicios.

De lo analizado se puede señalar que este derecho de impugnación es comúnmente utilizado por la minoría con el fin de frenar las resoluciones tomadas por la mayoría; sin embargo, por el desconocimiento de la aplicación de este derecho no es muy frecuente en la práctica societaria encontrar impugnaciones a las resoluciones de asamblea.

2. Acción de nulidad

En la Ley de Compañías no se establece una diferenciación clara entre la impugnación y nulidad de acuerdos sociales, por lo cual es importante mencionar que esta acción busca obtener la declaración de nulidad absoluta de los acuerdos societarios que hayan sido tomados en contrario a la ley. En el artículo 247 de la Ley de Compañías se establece de manera taxativa las resoluciones de la junta general que se consideraran nulas,⁵⁴

⁵³Daniel, Echaiz Moreno, “Análisis crítico de la Ley General de Sociedades a once años de su vigencia”, (Lima, 2010) edición electrónica

⁵⁴ Ecuador, *Ley de Compañías*, Art. 247.- Las resoluciones de la junta general serán nulas: 1) Cuando la compañía no estuviere en capacidad para adoptarlas, dada la finalidad social estatutaria; // 2) Cuando se las tomare con infracción de lo dispuesto en los Arts. 233, 236 y 238; // 3) Cuando faltare el quórum legal o reglamentario; // 4) Cuando tuvieren un objeto ilícito, imposible o contrario a las buenas costumbres; // 5) Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la compañía anónima o, por su contenido, violaren disposiciones dictadas por ésta para la protección de los acreedores de la compañía y de los tenedores de partes beneficiarias; y, // 6) Cuando se hubiere omitido la convocatoria a los comisarios, excepto en los casos de los Arts. 213, inciso segundo y 238.

estableciéndose para la utilización de esta acción el mismo procedimiento dado para la impugnación de acuerdos sociales. Sin embargo, la legitimación para interponer esta acción es mucho más amplia ya que puede ser promovida por cualquiera con legítimo interés.

Asimismo el plazo de caducidad para esta acción es diferente a la impugnación de acuerdos sociales, la acción de nulidad debe acogerse a los plazos y procedimientos establecidos en el Código Civil en lo relativo a la nulidad.

3. Derecho de separación

El derecho de separación también conocido como el derecho de retiro o derecho de recesso da la posibilidad a los socios o accionista a “separarse con anticipación de la sociedad, con el consecuente reembolso del capital aportado, cuando la asamblea general o junta de socios adopte una determinación que aparezca expresamente contemplada en la ley como presupuesto del mencionado derecho.”⁵⁵

Generalmente el uso de este derecho se da cuando la mayoría llega a aprobar reformas que afectan sustancialmente a la compañía, con lo cual los socios o accionistas minoritarios pueden renunciar a su condición de tal, retirándose de manera voluntaria de la sociedad. Por lo cual es una salida de la minoría para evitar que la ley de la mayoría se convierta en un mecanismo de abuso utilizado contra estos. “Lo verdaderamente relevante del derecho *sub examine* es la prerrogativa que le permite al socios obtener el reembolso anticipado de la participación de capital, aun antes que se produzca el pago del pasivo externo y sin necesidad de que la sociedad cumpla los drásticos requisitos exigidos para la reducción de capital. (art.45, ibídem)”⁵⁶

Tanto en la legislación ecuatoriana (Ley de Compañías), como en la colombiana (Ley 222 de 1995) y argentina (Ley 19.550); el ejercicio del derecho de separación es aplicable en casos verdaderamente excepcionales, determinándose de manera taxativa los actos societarios (fusión, escisión y transformación) esto con el fin de evitar que se convierta en

⁵⁵Francisco Reyes Villamizar, “*Derecho Societario*”, t II (Bogotá , 2004), 203

⁵⁶ Ibíd. 206

una regla general utilizada por la minoría, y para proteger el principio de conservación de la compañía.

Por su lado, la legislación española (Ley de Sociedades de Capital) ha desarrollado de manera más amplia el ejercicio del derecho de separación, no solo limitándose como en el caso de las legislaciones anteriormente señaladas, al ejercicio de este derecho en caso de afectaciones patrimoniales, sino ha establecido causas legales, estatutarias; y, específicamente la no distribución de dividendos, con lo cual los socio o accionistas podrán hacer uso de este derecho.⁵⁷

En la doctrina se ha establecido dos posiciones contrarias sobre el ejercicio del derecho de separación: la primera en la que se ve al derecho de receso como una institución útil que permite equilibrar los intereses de quienes forman la sociedad; y, la segunda un escape a las alteraciones que se da al contrato de sociedad y que la mayoría pretende introducir. Respecto a esta tesis “los tratadistas argentinos Zaldivar, Manóvil, Ragazzi y Rovira, señalan:

(...) la reducción de capital operada a consecuencia del ejercicio del receso, atenta -sin mayores beneficios en lo que hace a la protección del socios- contra la propia subsistencia del ente y, por ende, de la empresa social, amén del perjuicio apuntable con respecto de los acreedores sociales; todo ello sin que se justifiquen

⁵⁷España, *Ley de Sociedades de Capital* Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de 2010 Art. 346 Causas legales de separación.- **1.** Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo, incluidos los socios sin voto, tendrán derecho a separarse de la sociedad de capital en los casos siguientes: **a)** Sustitución o modificación sustancial del objeto social. **b)** Prórroga de la sociedad. **c)** Reactivación de la sociedad. **d)** Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos. **2.** En las sociedades de responsabilidad limitada tendrán, además, derecho a separarse de la sociedad los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales. **3.** En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero los socios tendrán derecho de separación en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.- //Art. 347 Causas estatutarias de separación.- **1.** Los estatutos podrán establecer otras causas de separación distintas a las previstas en presente ley. En este caso determinarán el modo en que deberá acreditarse la existencia de la causa, la forma de ejercitar el derecho de separación y el plazo de su ejercicio. **2.** Para la incorporación a los estatutos, la modificación o la supresión de estas causas de separación será necesario el consentimiento de todos los socios.- // Art. 348 bis Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.- **1.** A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. **2.** El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. **3.** Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas.

plenamente como institución, puesto que los socios no conformes pueden, en el tipo social que nos ocupa, transferir sus acciones obteniendo los mismos resultados.⁵⁸

De lo mencionado considero que el ejercicio del derecho de separación, es beneficioso para los socios o accionistas minoritarios, siempre y cuando exista limitación en su ejercicio, como lo hace la Ley de Compañías, al determinar de manera taxativa cuando se lo puede aplicar, por lo cual conviene mencionar los casos en los que se puede aplicar este retiro:

- Transformación, fusión o escisión que imponga a los socios mayor responsabilidad
- Transformación, fusión o escisión con desmejora patrimonial
- i) Cuando disminuya el porcentaje de participación de los socios
- ii) Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción o participación cuando se disminuya el valor nominal de la acción o participación
- iii) Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción
- En caso de prórroga de duración estatutaria de la sociedad⁵⁹

Según la Ley de Compañías este derecho lo pueden ejercer los socios o accionistas que no concurrieron a la junta general que decidió sobre los actos societarios de fusión, escisión y transformación, o, que votaron en contra de la reforma, a través de una notificación al representante legal dentro de los quince días siguientes a la fecha que se tomó la resolución.⁶⁰

1.4 Naturaleza jurídica de la Intervención Societaria

1.4.1 Que persigue la aplicación de esta medida

La naturaleza jurídica de la intervención es la de una medida protectora y provisional que tiene el carácter de excepcional y temporal, la misma que puede ser revocada por la Autoridad que la dictó. Sobre esta actuación se ha dicho que “el interés protegido mediante esta acción es el de la sociedad: aun cuando mediata e indirectamente

⁵⁸Francisco Reyes Villamizar, “*Derecho Societario*”, t II (Bogotá, 2004), 207

⁵⁹Ibíd., 210-211

⁶⁰Ecuador, *Ley de Compañías*, Art. 333

el solicitante (en su condición de socio) procure satisfacer sus propios intereses, está tutelando el interés del ente colectivo que lo integra.⁶¹

Es importante analizar la naturaleza jurídica de la intervención societaria en otras legislaciones, que a continuación se detallan:

En la legislación argentina “la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 contempla la intervención exclusivamente en protección de los socios o la sociedad, frente a los actos de los administradores”⁶². Además en el Código Procesal argentino, se contempla también esta medida pero para cautelar intereses de terceros. Su aplicación es de manera judicial, como medida cautelar “cuyo objeto es asegurar un estado de cosas –statu quo- que impediría, de alterarse, preservar el interés de terceros.”⁶³ Según lo que se establece en los artículos 113 y siguientes de la Ley de Sociedades 19.550, se puede solicitar la intervención al juez siempre y cuando se hayan agotado los procedimientos que se establezcan en el estatuto o se haya iniciado juicio de remoción de los administradores. Este tipo de intervención con el carácter de judicial, será analizado más adelante.

En la legislación colombiana la facultad de imponer esta medida a las compañías que están sujetas a su control la tiene la Superintendencia de Sociedades, según lo dispuesto en la ley 222 de 1995. El órgano de control al intervenir a una sociedad, lo que busca es dar diferentes salidas para la seguridad de los socios especialmente a los minoritarios; y, dar protección a terceros; por lo cual dicha medida

...solo se ejercerá sobre aquellas sociedades que se encuentren en situaciones críticas respecto de las cuales se podrán ejercer un mayor número de facultades, en orden a lograr la pronta recuperación de las empresas que se encuentran en tal situación, tales como promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución de los mismos, ...ordenar la remoción de los

⁶¹ Carlos, Molina Sandoval, “*Problemas que plantea la legitimación pasiva en la intervención societaria*” en Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica Derecho Comercial y de las Obligaciones No. 38 (Buenos Aires, 2005-B):217

⁶² Eduardo A. Zannoni, “Intervención judicial de sociedades solicitada por terceros” en Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica Derecho Comercial y de las Obligaciones año 15 No.85-190(Buenos Aires, 1982):758

⁶³ *Ibíd.*, 758

administradores, revisor fiscal y empleados, cuando se presenten irregularidades que así lo ameriten...⁶⁴

Al otorgarle facultades de control y vigilancia a la Superintendencia de Sociedades, se ha pretendido evitar que la justicia ordinaria tenga competencia para resolver problemas de carácter societario; sin embargo si se mantiene el conocimiento ante jueces o árbitros “las acciones sociales de responsabilidad”, que se derivan cuando los asociados reunidos en asamblea general o junta de socios, determinan la iniciación de un proceso judicial en interés de la sociedad, cuando se ha producido un perjuicio (dilapidación, malversación, disminución no justificada, etc.) del patrimonio social, originado en la actuación negligente, deshonesto o desleal del administrado”⁶⁵

Por otro lado, los “representantes legales de una persona jurídica deben realizar los actos que consideren necesarios, dentro del marco de la ley y del estatuto, para el normal ejercicio y funcionamiento de las mismas, obviamente respetando la voluntad social manifestada a través de los órganos societarios comunes llamados junta general, directorios, etc.”⁶⁶

La intervención societaria procede cuando existe un grave peligro para la sociedad mercantil, el cual se evidencia a través de resoluciones tomadas por la mayoría que afecten los derechos de los minoritarios, por la ejecución de dichas resoluciones por parte de los administradores; o, a su vez por impugnaciones de la minoría que afecte el normal desenvolvimiento de la compañía.

La intervención limita las atribuciones otorgadas al representante legal o a los órganos de administración, por la ley o el estatuto social de la compañía; para poner fin a situaciones anómalas que podrían generar perjuicios para la compañía lo cual desembocaría en afectaciones patrimoniales, así mismo tampoco genera derechos para los socios o accionistas minoritarios.

⁶⁴ Andrés Ortiz Herbener, “*La Intervención Societaria*”, *Revista Jurídica* No. 18 (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil): 360

⁶⁵ *Ibíd.*, 361

⁶⁶ *Ibíd.* 348

Sin embargo, la concepción de esta medida para los socios accionistas es diferente, se le ha llegado a considerar como una sanción tanto para los socios o accionistas mayoritarios como para el representante legal. Por lo cual quienes se sienten perjudicados presentan denuncias para que la autoridad verifique a través de inspecciones de control, siendo éste el camino para llegar a la intervención. Las denuncias son calificadas y admitidas a trámite en base a lo que dispone el Reglamento de Denuncias.

Sin embargo, internamente en el órgano de control no existen criterios definidos para la declaración de intervención, tanto en el área jurídica, como en el área de control quedando atado muchas veces a una apreciación subjetiva por parte de los especialistas encargados, pudiendo diferir los criterios entre los dos informes, adicionalmente para la declaración de intervención no es necesario que existan informes coincidentes del área contable y jurídica (a lo contrario del levantamiento de intervención).

Lo que ha llevado una constante aplicación de la medida, perdiendo así el carácter de excepcional, de acuerdo con la información tomada de Intendencia Regional de Quito, en donde a partir del año 2013 al 2016 existe un promedio de 50 resoluciones anuales, que se emiten con la de declaración de intervención.

1.5 Análisis de las causas de Intervención Societaria

En la Ley de Compañías y en el Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías, se han establecido de manera taxativa las causales por las cuales el organismo de control podrá declarar la intervención, las cuales son las siguientes:

1. *Si lo solicitare uno o más accionistas o socios que representen cuando menos el diez por ciento del capital pagado de la compañía, manifestando que han sufrido o se hallan en riesgo de sufrir grave perjuicio por incumplimiento o violación de la Ley, sus reglamentos o el estatuto de la compañía, en que hubieren incurrido ésta o sus administradores. // El o los peticionarios deberán comprobar su calidad*

*de titulares del porcentaje de capital señalado en el inciso anterior; indicar, con precisión, las violaciones o incumplimiento de la Ley, sus reglamentos o el estatuto de la compañía que motiven el pedido y expresar las razones por las que tales hechos les ocasionan o pueden ocasionarles perjuicio;*⁶⁷

De lo mencionado se evidencia que esta causal procura amparar el derecho de las minorías estableciendo un porcentaje mínimo del diez por ciento para dar admisibilidad a la solicitud que pida la intervención de la compañía, por haber sufrido o estar en riesgo de sufrir un grave perjuicio. Este perjuicio se relaciona con el abuso que la mayoría puede ejecutar, a través de los administradores, así como a través de las decisiones que se tomen en junta las que pretendan violar la Ley, los reglamentos y el estatuto de la compañía.

Sin embargo dentro de la normativa no se ha señalado que se entiende por *grave perjuicio*, dejando dicho concepto a una percepción abierta y subjetiva, sobre la afectación que puede tener una compañía ya sea en el ámbito económico o administrativo. En contraste con la parquedad de la legislación ecuatoriana, la legislación argentina dice que “una sociedad está en grave peligro y por ende sus accionistas sufrir perjuicios, cuando corra el riesgo de perder ganancias significativas por una conducta desleal del administrador o cuando esta conducta se encamine a una causal de disolución.”⁶⁸

De acuerdo a lo mencionado sería muy subjetivo que el socio o accionista a su libre albedrío determine de manera específica cuál es el grave perjuicio que va a sufrir. Por otro lado, que acuda ante un juez de lo civil, para que éste a su vez determine el grave perjuicio, lo cual sería un trámite desgastante y sin respuestas favorables por el desconocimiento de la materia societaria en jueces civilistas. Por lo que considero que es suficiente que en la solicitud del socio o accionista manifieste de manera general el incumplimiento o violación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, para que dentro de la inspección, el órgano de control determine con precisión las irregularidades que se han detectado, lo que servirá para declarar la intervención.

⁶⁷Ecuador, Ley de Compañías, Art. 354

⁶⁸Andrés Ortiz Herbener, “*La Intervención Societaria*”, 367

Según Miriam Valladares⁶⁹ como criterio institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se ha establecido el siguiente estándar de gravedad a con el cual se establece si se debe aplicar o no la intervención:

1. Si la compañía no ha aplicado en su contabilidad las normas internacionales de formación financiera (NIIF)
2. Si se evidencia la existencia de activos o pasivos de la compañía, que no han sido registrados en la contabilidad.
3. Si no se presenta el respaldo contable documental que sustente los registros realizados en la contabilidad de la compañía, así como también el uso que se ha dado al dinero ingresado a la compañía.

Si cualquiera de estar tres causas se detecta en la inspección contable se puede determinar que no existen elementos suficientes para determinar la situación economía real de la compañía con lo cual en el informe de inspección se sugerirá la intervención de la compañía, previo al pronunciamiento jurídico correspondiente.

2. Si se comprobare, ante denuncia de parte interesada o de oficio, que en la contabilidad de la compañía se han ocultado activos o pasivos o se ha incurrido en falsedades u otras irregularidades graves, y que estos hechos pudieren generar perjuicios para los socios, accionistas o terceros. // En la denuncia deberá determinarse con precisión las falsedades o irregularidades de la contabilidad, así como los perjuicios que se hubieren causado o pudieren causarse⁷⁰

La mencionada causal se refiere a irregularidades contables y deja abierta la posibilidad de que sea puesta en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través de denuncia por socios, accionistas o terceros.

El órgano de control a través de la inspección de verificación deberá comprobar la existencia de los hechos denunciados como el ocultamiento de activos o pasivos,

⁶⁹ Miriam Valladares, Subdirectora de Intervención y Control, Intendencia de Quito, entrevistada por Mariela Espinoza H., 18 de enero de 2017.

⁷⁰Ecuador, *Ley de Compañías*, Art. 354

irregularidades o falsedades contables; y, los perjuicios que ocasionen estos actos. En caso de que no se llegue a determinar la situación financiera y económica real de la compañía se deberá disponer la intervención de la compañía.

A pesar de que la Ley de Compañías, en el artículo 15 faculta a los socios o accionistas a tener acceso a la información contable de la compañía, sin embargo se limita a los balances generales y al estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, mas no a los sustentos contables de las cuentas o cifras que se evidencien en el balance, por lo cual se debe recurrir a la denuncia para que el órgano de control sea quien verifique por la facultad otorgada por la Ley.

Dentro de causal de intervención se deja abierta la posibilidad para que un tercero sin ningún tipo de restricción, presente la denuncia al órgano de control; considerando así, que los terceros interesados idóneos para presentar dicha denuncia son los comisarios y auditores externos.

Estos terceros que forman parte de los órganos de fiscalización, tienen derecho ilimitado a la verificación de las operaciones de la compañía y a requerir a los administradores cualquier tipo de información; por lo cual con base a la amplia facultad que poseen, tienen la obligación jurídica de poner en conocimiento tanto de la junta general como de la Superintendencia, cualquier tipo de irregularidad que detecten.

3. *Si requerida la compañía por la Superintendencia para presentar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias o documentos y comprobantes necesarios para determinar la situación financiera de la compañía, no lo hiciere, y hubiere motivos para temer que con su renuencia trate de encubrir una situación económica o financiera que implique graves riesgos para sus accionistas, socios o terceros*⁷¹

Esta causal que hace referencia a la no presentación de balances ante requerimiento del órgano de control, alude tanto a la disposición establecida en los artículos 20 y 23 de

⁷¹Ibíd., Art. 354

la Ley de Compañías, en los que se detallan los documentos contables que de manera obligatoria, deben ser presentados por las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el primer cuatrimestre de cada año; y, además se refiere a la renuencia del representante legal de una compañía que está siendo sujeta a una inspección de control y no presenta los descargos o documentos de las cuentas contables que están siendo verificadas.

Esta causal es la de mayor aplicación por parte del órgano de control para declarar la intervención de las compañías, ya que en la mayoría de conclusiones de los informes de control que se remiten al área legal, se señala que no se presentaron los descargos suficientes que respalden los movimientos contables de las cuentas verificadas.

Es necesario señalar que en las mencionadas inspecciones, los balances verificados son balances cortados a una fecha determinada, y no son los balances que se presentan al final del ejercicio económico, los cuales son conocidos y aprobados por junta. Por lo cual la renuencia por parte del representante legal, hace presumir que se está encubriendo la situación financiera de la compañía, lo que implica poner en riesgo a los socios, accionistas o terceros.

4. Si una compañía recurriere a cualquier forma de invitación pública para obtener dinero de terceros a base de planes, sorteos, promesas u ofertas generales de venta, entrega o construcción de bienes muebles o inmuebles, o suministro de préstamos, cuando no hubiere garantías suficientes para respaldar los dineros recibidos y tal situación implicare graves riesgos para terceros, o cuando efectuaren una oferta pública de valores, sin cumplir con los requisitos señalados en la Ley de Mercado de Valores⁷²

Esta causal de intervención se aplica principalmente a las compañías cuyo objeto social es el inmobiliario, y ha venido tomando fuerza a partir de las denuncias presentadas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por terceros afectados.

⁷²Ibíd., Art. 354

A partir del año 2013, existe en la base de datos de la Institución de Control denuncias de compañías inmobiliarias que no necesariamente estaban inscritas en el Registro de Mercado de Valores, las cuales recurrían a la invitación pública para captar dinero de personas que se encontraban interesadas en los bienes ofertados, sin embargo, luego de las inspecciones de control se determinó que ciertas compañías inmobiliarias, no poseían un patrimonio suficiente que respalde el dinero recibido por parte de terceros, por dicha falta de garantía, se procedía a declarar la intervención, y en algunos casos se llegó a declarar de oficio la disolución de las compañías.

En el caso de compañías que realicen oferta pública de valores, se impondrá la medida de intervención cuando se determine que lo están realizando sin cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Mercado de Valores, por el grave riesgo que este tipo de transacciones puede generar al público.

Así mismo, esta causal se configura cuando se comprueba la violación de los derechos de los socios, la contravención al contrato social, el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad ya sea en perjuicio de la propia compañía, de los socios o de terceros, con base a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Compañías. De la misma forma esta causal se ha utilizado para reprimir el lavado de activos en las compañías.

5. Cuando la compañía se encontrare en cualquiera de los casos referidos en los artículos 325 o 432 inciso cuarto, de esta Ley⁷³

Esta causal hace referencia a la obligación que tienen ciertas compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de contratar Auditoría Externa, para lo cual el órgano de control, a través de resolución ha establecido normas sobre montos mínimos de activos en los casos de contratación obligatoria de auditoría externa⁷⁴.

⁷³Ibid., Art. 354

⁷⁴Ecuador, *Resolución Superintendencia de Compañías 12* Fijación de montos de activos para contratar auditoría externa, en Registro Oficial No. 621 (18 de julio de 2002) Art. 1 a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, cuyos activos excedan de 100.000,00 dólares de los Estados Unidos de América; // b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas que se hubieran establecido en el Ecuador y las asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan los 100.000,00 dólares de los Estados Unidos de

Las compañías que tienen la obligación de contratar auditoría externa en el plazo de 90 días previo al cierre del ejercicio económico, comunicando al órgano de control sobre la contratación, en los 30 días posteriores a la firma del contrato. En caso de incumplimiento de esta disposición la Superintendencia podrá imponer una multa por cada día de retraso en la contratación durante cuarenta días más, en caso de persistir en el incumplimiento podrá ordenar la intervención de la compañía.⁷⁵

La importancia de la contratación de auditoría externa está dada por el derecho ilimitado que tienen los auditores para verificar las operaciones contables y determinar la real situación económica, financiera y jurídica de la compañía auditada. Aún más, los auditores externos tienen la obligación de hacer constar en los informes y pronunciamientos definitivos que conoce la junta general y se remite anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los malos manejos contables o irregularidades que detecten, amparándose en la causal de intervención segunda del artículo 354 de la Ley de Compañías, ya analizada.

*6. Cuando se hubieren incumplido por dos o más años seguidos las obligaciones constantes en el artículo 131 y en los dos últimos incisos del artículo 263 de esta Ley.*⁷⁶

Esta causal se refiere a la obligación que tienen las compañías nacionales sobre la presentación de manera anual de la nómina de las compañías extranjeras que consten como socias o accionistas, en la que deberá adjuntar información como nombre, nacionalidad y domicilio y remitir al organismo de control los respaldos de la información ingresada.

Es obligación de los socios o accionistas extranjeros entregar la información mencionada al representante legal de la compañía nacional, para que éste cumpla con la

América; y, c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el 1.000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América

⁷⁵Ecuador, Ley de Compañías, Art. 325

⁷⁶Ibíd. Art. 354

obligación indicada anteriormente. En caso de que el representante legal no cuente con la información a pesar de haber requerido al socio o accionista, podrá pedir que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la declare como remisa, y de esta forma evitar caer en esta causal de intervención, contemplada en este numeral. (artículo 4 del Reglamento sobre la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las sociedades sujetas a su control y vigilancia)

Una vez que se han analizado las causales de intervención, el doctor Roberto Salgado Valdez manifiesta que sería importante que “sí una compañía incurriere en una causal de intervención que amerite patrimonialmente precautelar la “prenda común” en beneficio de los acreedores, bien la Ley de Compañías podría contener una disposición por la que se confiera al Superintendente de Compañías la facultad de prohibir nuevas inversiones (salvo las solicitadas fundamentalmente por el interventor), prohibir la distribución de utilidades acumuladas, así como de ser el caso, bajo pena de disolución, conceder a la compañía un plazo para que resuelva, instrumente e inscriba un aumento de capital social en la cuantía que disponga o, si fuere del caso, reduzca dicho capital social o formalice ambos actos. Todo ello bajo el criterio de permanencia de la compañía y de precautelar los derechos de terceros y de los propios socios o accionistas.”⁷⁷

1.6 Mecanismos de Intervención Societaria

Dentro de la legislación ecuatoriana existen dos mecanismos específicos para llegar a la intervención societaria:

1. La denuncia; y,
2. La inspección de control

⁷⁷Roberto Salgado Valdez, “*Tratado de Derecho Empresarial y Societario*” t. V, 139

Las dos figuras se encuentran contempladas dentro de las facultades otorgadas a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según lo establece el artículo 432 de la Ley de Compañías el mismo que señala:

(...) Cuando en virtud de una denuncia o mediante inspección se comprobare que se han violado los derechos de los socios, que se ha contravenido el contrato social o la ley, o que se ha abusado de la personalidad jurídica de la sociedad según lo dispuesto en el Art. 17; en perjuicio de la propia compañía, de sus socios o terceros, se dispondrá inmediatamente la intervención de la compañía (...)⁷⁸

1. Denuncia

Los socios, accionistas o terceros, quienes se consideren afectados por actuaciones de la compañía o por hechos suscitados en la misma, pueden presentar una denuncia por escrito, la misma que debe reunir los requisitos que señala el Reglamento de Denuncias⁷⁹ emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros .

Esta figura de denuncia, que es de carácter administrativo, se la presenta ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; siendo el Secretario General o el

⁷⁸ Ecuador, *Ley de Compañías*, Art. 432

⁷⁹Ecuador, *Reglamento de Denuncias* en Registro Oficial Suplemente No. 205 de 17 de marzo de 2014, Art. 3.- Contenido.- La denuncia contendrá: a) La designación de la autoridad administrativa ante la que se formule; //b) Los nombres y apellidos completos del denunciante, edad, nacionalidad, estado civil, número de cédula de ciudadanía o del registro único de contribuyentes, según sea el caso, y la calidad en la que presenta la denuncia// c) El nombre de la compañía a la que se refiere la denuncia // d) Los nombres y apellidos del administrador, administradores o ex administradores de la compañía, contra quienes se propone la denuncia // e) La dirección exacta en donde se encuentran las oficinas o instalaciones de la persona, compañía o ente denunciado, si fuere conocida por el denunciante // f) La afirmación del denunciante bajo juramento de que la individualidad o el domicilio del o de los denunciados sea imposible determinar; en caso que medie la declaración juramentada en cuestión, la denuncia se comunicará, a costa de la parte denunciante, a través de tres publicaciones realizadas conforme el Código de Procedimiento Civil // g) Los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la denuncia, expuestos con claridad y precisión, los cuales deberán versar exclusivamente sobre aspectos sujetos al ámbito de control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías // h) La declaración juramentada de que el denunciante no ha sometido a conocimiento y decisión de la justicia ordinaria, constitucional o arbitral, o ante otras autoridades o instituciones, los hechos materia de la denuncia // i) La petición o pretensión concreta que se formula // j) El señalamiento del domicilio donde deberá notificarse al denunciante; y // k) La firma del denunciante o su representante legal para el caso de personas jurídicas, de su apoderado y, en cualquier caso, del abogado patrocinador. A la denuncia se adjuntará el poder general o especial conferido por el denunciante y el nombramiento debidamente legalizado del representante legal de la persona jurídica que interponga la denuncia, según fuere el caso. // l) De ser el caso, se acompañarán los documentos que disponga el denunciante para sustentar el contenido de su denuncia. // Cuando la denuncia fuere propuesta por terceros, a más de los requisitos señalados en este artículo el proponente precisará el perjuicio que le hubieren ocasionado o pudieren ocasionarle los hechos denunciados.

Delegado del Superintendente, quien tiene la facultad de admitirla a trámite o abstenerse de conocerla cuando los hechos que se denuncien estén ya en conocimiento de otras autoridades como jueces o árbitros.

La denuncia permite dar a conocer al órgano de control el grave perjuicio al que está expuesta la compañía por actuaciones de los administradores, o la violación o desconocimiento de los derechos del socio o accionista denunciante.

Para interponer una denuncia, no se ha establecido un porcentaje mínimo de participación accionaria, que debe reunir el socio o accionista, al contrario de la impugnación de acuerdos, que ya se analizó anteriormente; no obstante, en el Reglamento de Denuncias, para los terceros que denuncien, se requiere que de manera concisa mencionen el perjuicio que les hubieren ocasionado o pudieren ocasionarles los hechos denunciados. (Artículo 3 Reglamento de Denuncias). Así mismo en el reglamento de denuncias en concordancia con la Ley de Compañías se establece que se impondrá una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en general, a quienes presenten denuncias infundadas. (Artículo 356 Ley de Compañías)

2. Inspección de control

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros establece planes anuales de vigilancia a las compañías sujetas a su control, dichos planes los organiza principalmente con base a la información que recibe anualmente de las compañías, ya sea por actos societarios inscritos directamente en el Registro Mercantil o por documentación financiera; sin embargo, existen también otros aspectos que conllevan a que se realicen inspecciones de control como la actividad a que se dedican las compañías o requerimientos de rectificaciones de balances.

Por lo mencionado, la inspección de control se caracteriza por ser sorpresiva, con lo cual se pretende no dar tiempo a los administradores que manipulen la documentación o respaldos tanto contables como legales.

1.7 Clases de Intervención

1.7.1 Intervención Administrativa

La intervención administrativa es una medida que en el Ecuador es impuesta por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de las facultades otorgadas en la Ley de Compañías; la cual se constituye mediante un acto administrativo que debe estar motivado, dicho acto es esencialmente revocable ya sea porque se superaron las causales que motivaron su declaración, por recurrir a la Unidad de lo Contencioso Administrativo, o por la imposición de un amparo constitucional.

La facultad para intervenir otorgada al ente de control, constituye una atribución discrecional, ya que para imponer la intervención, la autoridad deberá considerar que se han reunido los elementos suficientes para declarar la intervención. El doctor Juan Santillan Nolivos, quien al referirse a este caso sostiene la tesis de que se trata de un acto administrativo discrecional:

Ejerce además poder **discrecional** cuando interviene en una Compañía para proteger los intereses de los accionistas o terceros que han sufrido o se hallan en riesgo de sufrir graves perjuicios a sus intereses...” “En los casos mencionados, la Superintendencia de Compañías no se limita a ser mero ejecutor de la Ley ni al mero cumplimiento de una obligación que le impone la norma. El Superintendente de Compañías PUEDE, además, de no conseguir el resultado apetecido con su intervención y a fin de que los perjuicios irrogados a los accionistas y socios no continúen, declarar la disolución de las Compañías (...)”⁸⁰

La designación del interventor por parte de la Superintendencia de Compañías del interventor, se lo deberá realizar en la misma resolución que declara la intervención y con base al Reglamento para la calificación, selección, designación y retribución de interventores que no pertenecieren al personal de la Superintendencia de Compañías, considerando que dicha designación se realizará de acuerdo a la actividad económica de la compañía; sin embargo, en la práctica el nombramiento del interventor no se lo hace

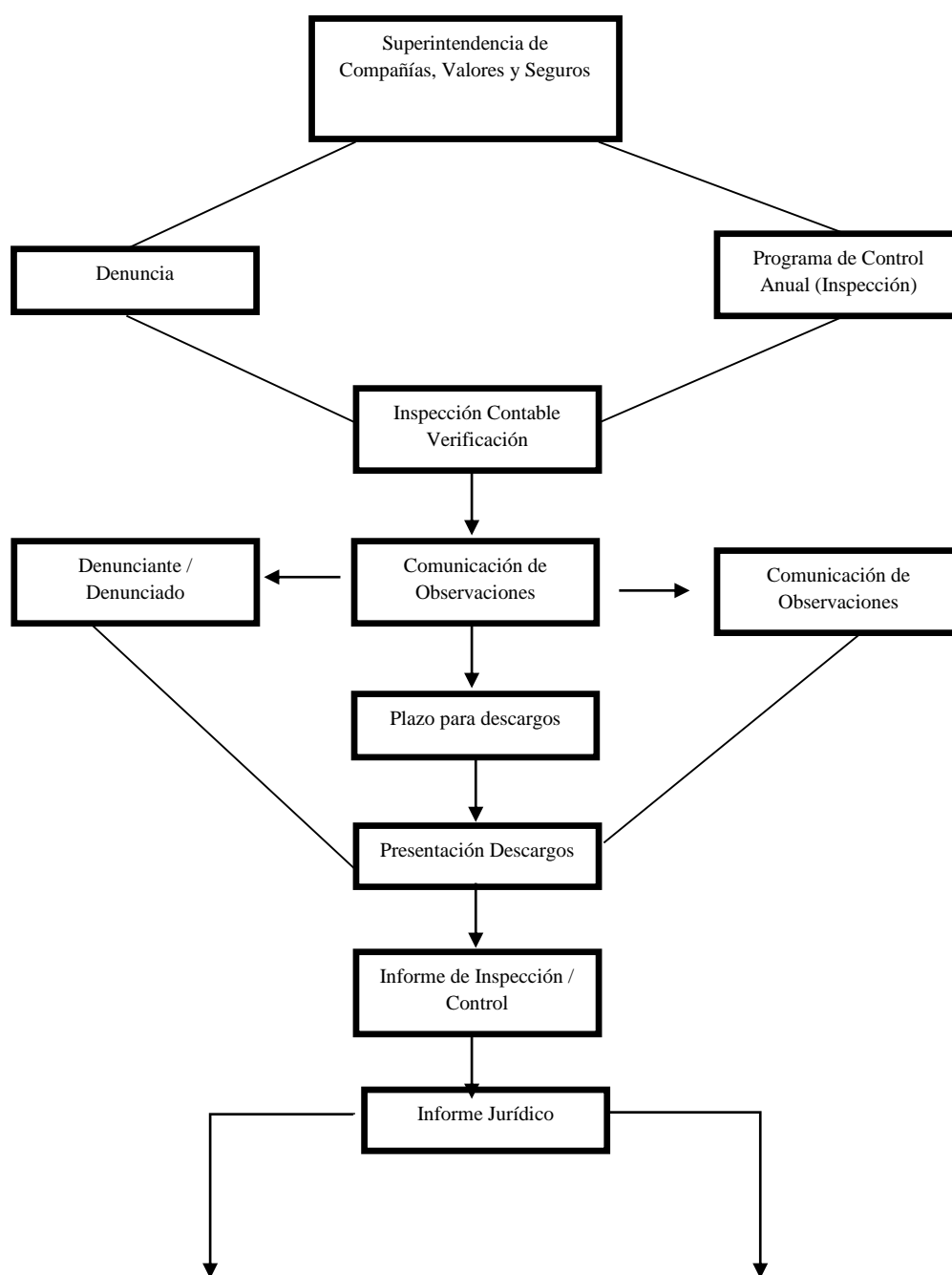
⁸⁰ Roberto Salgado Valdez, “*Tratado de Derecho Empresarial y Societario*” t V , 128

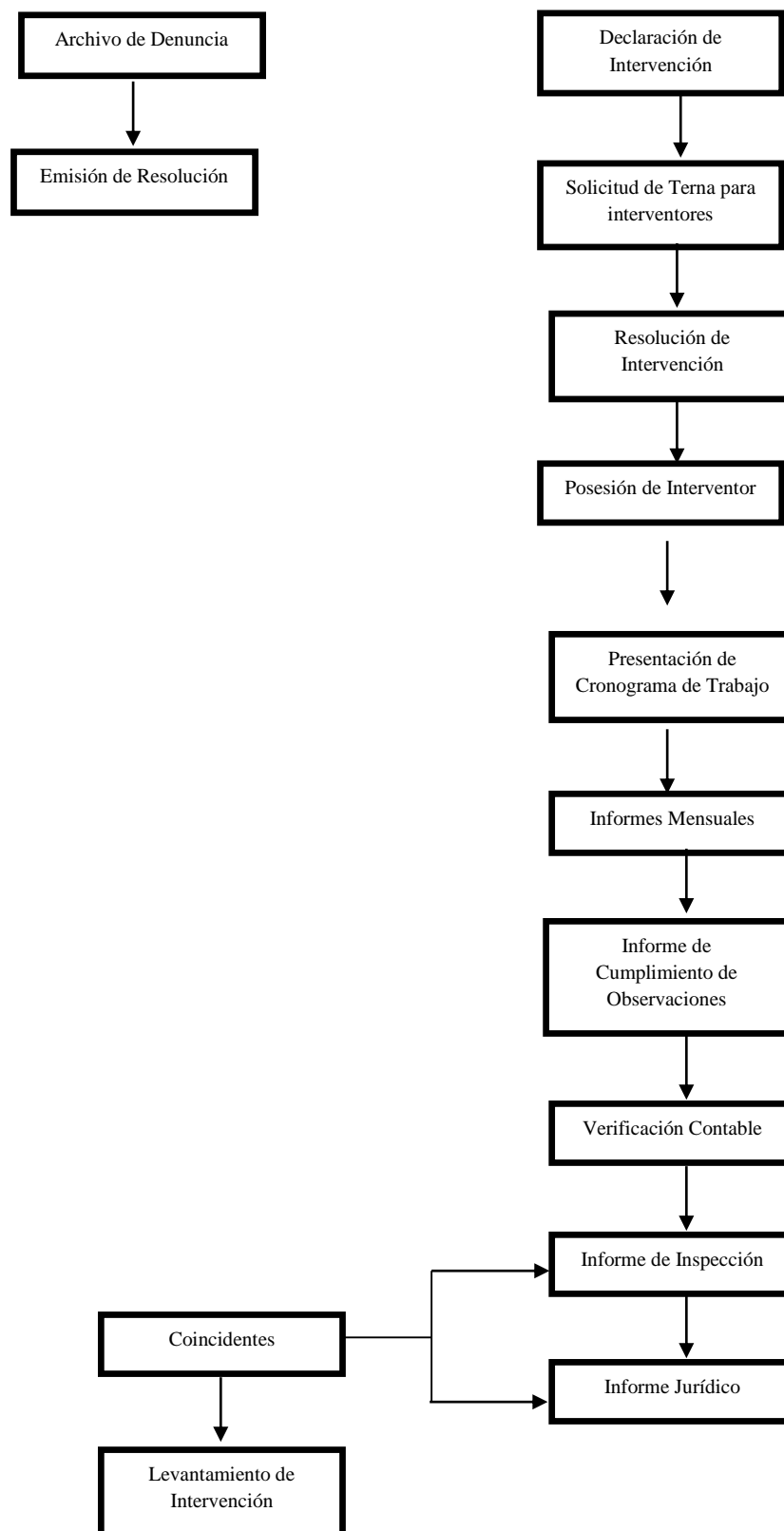
de acuerdo a la mencionada disposición legal, sino de acuerdo a la experiencia y conocimiento del área contable y financiera.

Para ilustrar mejor el proceso de intervención en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a continuación se detalla el siguiente gráfico:

Figura 1

Flujograma del proceso de Intervención Societaria por vía administrativa





1.7.2 Intervención Judicial

La intervención judicial no se encuentra regulada en la legislación ecuatoriana, ya que la facultad de aplicación de esta medida está dada únicamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que sea esta institución quien aplique de manera administrativa a las compañías sujetas a su control; sin embargo, a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, COIP, se ha establecido responsabilidad penal para personas jurídicas, pudiendo el Juez disponer como medida cautelar que el órgano de control declare la intervención de la persona jurídica, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Ley de Compañías. (Artículo 550COIP)

En la Intendencia de Quito ya se ha tenido el conocimiento de tres casos, dos de compañías nacionales y uno de una sucursal de compañía extranjera, en los cuales se ha recibido orden judicial de la Unidad Judicial Penal, disponiendo como medida cautelar la aplicación de la intervención de acuerdo al procedimiento administrativo establecido en el Ley de Compañías.

La intervención judicial al igual que la intervención administrativa es una medida que se aplica para combatir los conflictos societarios generados principalmente por la violación del interés social, sin embargo en los dos tipos de intervención se desvirtúa el fin de esta medida y los socios o accionistas denunciantes, han llegado a considerar que al momento de su aplicación se está sancionando a la compañía o a sus administradores.

Existen varias legislaciones en donde se ha desarrollado esta medida. Se analizará la legislación argentina, por cuanto dicha medida se encuentra correctamente reglamentada, y basada en el principio de conservación de empresa. La Ley de Sociedades Comerciales argentina, ha establecido tres requisitos para poder aplicar esta medida:

- Su aplicación es para resolver únicamente problemas que se han generado por actos u omisiones de los administradores de la compañía que pongan en grave riesgo a la sociedad mercantil: El peligro grave e inminente para la sociedad que se señala como requisito para la aplicación de la intervención judicial se basa en fallas esencialmente contables, que se producen de las actuaciones de los

administradores, las cuales podrían causar un grave perjuicio para los socios o para la misma compañía.

- En forma previa a su aplicación, se deben agotar los recursos de subsanación que se hayan establecido en el estatuto social de la compañía: Como la intervención judicial se aplica esencialmente por actos u omisiones realizados por los administradores de la compañía, se establece en la legislación argentina, como requisito previo a la aplicación de esta medida que se haya agotado todos los recursos y procedimientos fijados en el estatuto social, lo cual corresponde básicamente a que la asamblea remueva a los administradores o a procesos de mediación. Sin embargo, considero que no tiene sentido que previo a la aplicación de esta medida se exija que se agote todos los recursos societarios, por cuanto los socios o accionistas cuyo porcentaje de participación social es mínimo no podrán solicitar que se convoque a junta y peor incidir en asamblea sobre la decisión de remoción de los administradores, consecuentemente la aplicación de esta medida podría llegar de forma tardía a la compañía. Así como también iniciar procesos de mediación dependerá de la voluntad de los administradores y de los socios o accionistas.
- La presentación de una contracautela para resguardar cualquier tipo de perjuicio que pueda ocasionar a la compañía por la aplicación de esta medida. Dentro de la legislación argentina la intervención no es una medida de carácter reservado y esto es a consecuencia de la aplicación judicial, por lo cual se exige la aplicación de una contracautela por el daño que se puede ocasionar a la compañía principalmente con proveedores y entidades bancarias. La legislación argentina exige para la contracautela una caución real, y no la entrega de las acciones de la compañía, sin embargo considero que recibir las acciones de una sociedad anónima con el endoso en blanco, sería una forma de prevenir que se desvirtúe el fin de la intervención y se libere a la compañía de los accionistas conflictivos que generan un retraso a la compañía al buscar interponer esta medida como sanción.

Por otro lado en la intervención judicial el juez designará a un interventor y establecerá el plazo de duración de la medida. En la legislación argentina se establecen tres tipos de interventores:

- e) el mero veedor: cuya función es controlar como se realizan las operaciones en la compañía y por parte de los administradores de la misma.
- f) el coadministrador: cuya función es participar de manera conjunta con el representante legal en la administración de la compañía.
- g) el administrador: cuya función es reemplazar al representante legal de la compañía en la administración de la misma.

De acuerdo al grave perjuicio al que está expuesta la compañía, se establecerá el tipo de interventor designado, asemejándose con nuestra legislación el interventor como veedor ya que tendrá el papel de informante, entre sus funciones no está la recolección de pruebas ni investigar los hechos realizados por los administradores, ya que eso le corresponde a las partes procesales, para que el juez pueda establecer el grave perjuicio que se ha ocasionado a la sociedad.

Una vez que a lo largo de este capítulo se analizó de manera general a la intervención societaria, y con una visión clara de cuál es su origen por los diferentes tipos de conflictividad que se generan en una sociedad, las causas para la aplicación de esta medida, los mecanismos que se han establecido en la Ley de Compañías para que el órgano de control aplique la intervención; y, los diferentes tipos de intervención societaria, se analizará en el siguiente capítulo cuales son los problemas que se ha generado en la aplicación de esta medida y sus posibles soluciones.

Capítulo segundo

2. Los problemas de la Intervención Societaria en el Ecuador y posibles soluciones

En este capítulo se busca establecer los problemas de concepción por los socios, accionistas o terceros; de aplicación por parte del órgano de control; y, los vacíos legales que existen en nuestra legislación. Por lo cual se procederá a realizar un análisis con datos obtenidos de la Intendencia Regional de Quito de los años 2013 al 2016, en el cual se evidenciará el número de compañías intervenidas, las causales de mayor aplicación por el ente de control, el tiempo de duración de la medida; y sobre las posibles soluciones que se pueden dar previo a la aplicación de la medida ya que como se ha mencionado es de carácter excepcional, por lo que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como ente de control debería restringir su la aplicación y exigir (con base al Reglamento de Denuncias de la Superintendencia de Compañías) que los socios, accionistas o terceros que presenten denuncias respaldadas en información fehaciente que demuestre el grave perjuicio al que se encuentran expuestos.

2.1 La desnaturalización de la Intervención

En base al análisis realizado es evidente que se ha dado una desnaturalización de la medida de intervención, “se ha distorsionado su filosofía y finalidad y erróneamente han querido presentarla como una medida punitiva, sancionadora, llegando erróneamente a afirmar que la intervención es la antesala de la disolución y posterior liquidación de las compañías.”⁸¹ Sin embargo, como bien se ha dicho “con la intervención no se afecta o entorpecen las operaciones, transacciones y normal funcionamiento de la sociedad intervenida, menos aún, de ninguna manera afecta a su personalidad jurídica”;⁸² lo que busca resolver es resolver el problema de administración que tiene la sociedad, tutelar el

⁸¹ Roberto Caizahuano, “Intervención administrativa a las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías”: 48

⁸²Ibíd., 55

interés social; y, conservar a la compañía por lo cual se habla de una medida de naturaleza proteccionista.

Sin embargo, la intervención de una compañía si puede terminar en la disolución siempre y cuando se evidencie a través de un informe presentado por el interventor, en el que señale que las causas que generaron no pueden ser subsanadas; o, que el representante legal no entregue documentación o ni preste facilidades para que el interventor pueda cumplir con su cargo, así mismo se podrá concluir en disolución cuando la compañía no pague los honorarios del interventor.⁸³

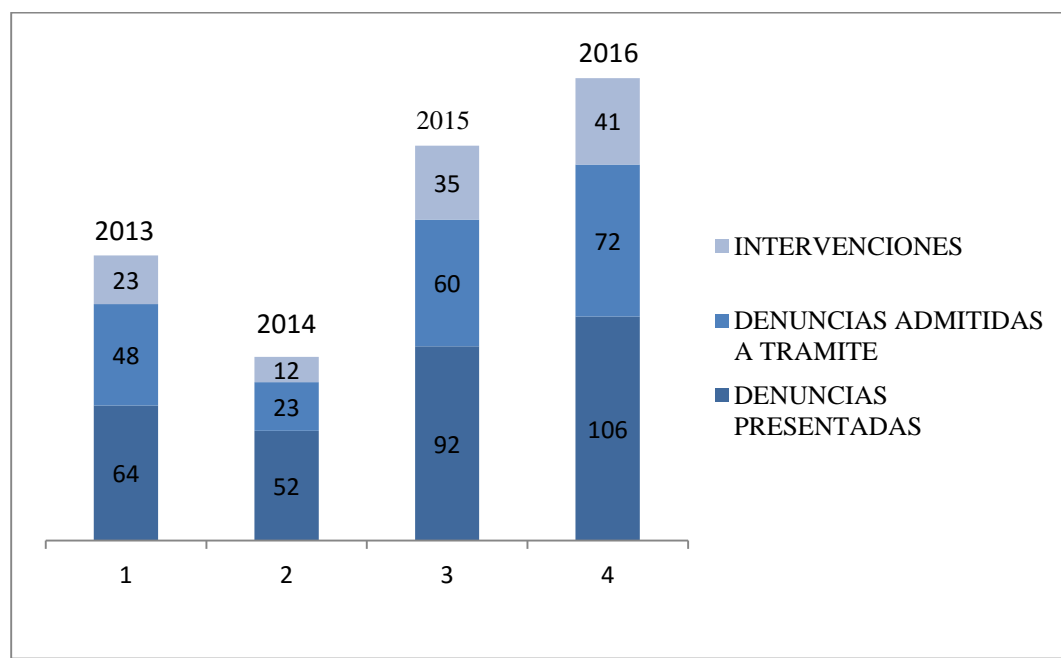
Como resultado de la investigación realizada en la Intendencia Regional de Quito de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; se determina que la aplicación de esta medida por parte del órgano de control, no es de carácter restrictivo, cambiando así su naturaleza. De acuerdo al detalle que se puede ver en el siguiente cuadro se podrá observar que la mayoría de denuncias presentadas ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que han sido admitidas a trámite, han concluido con resolución declarando la intervención de la compañía. Existe un número muy reducido de resoluciones con las que se archiva la denuncia presentada. Los datos tomados para este análisis son de los años 2013 y 2016 hasta el mes de septiembre.

TABLA 1

Número de denuncias que terminan en intervención

NÚMERO DE DENUNCIAS QUE TERMINAN EN INTERVENCIÓN			
AÑO	DENUNCIAS PRESENTADAS	DENUNCIAS ADMITIDAS A TRAMITE	INTERVENCIONES
2013	64	48	23
2014	52	23	12
2015	92	60	35
2016	106	72	41

⁸³ Ecuador, *Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías*, Arts. 15 y 19



Elaboración propia

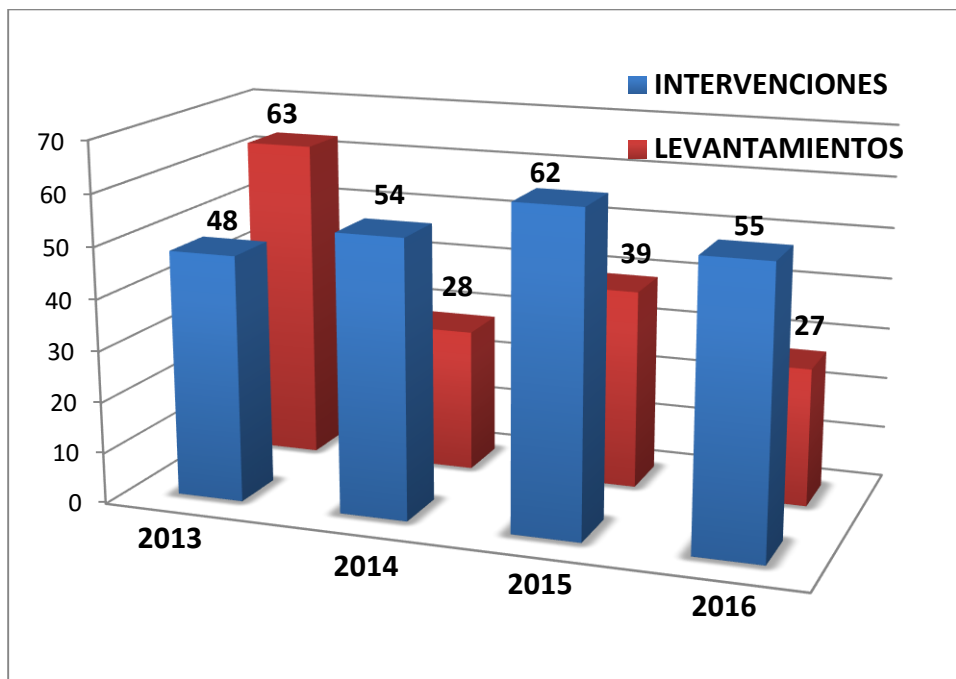
No se puede obtener un dato específico sobre las inspecciones de control que la Superintendencia realiza de oficio dentro de los planes anuales de vigilancia, ya que la información que tiene el área de inspección y control encierra tanto las inspecciones del plan anual como las inspecciones por actos societarios, por lo cual no existen datos sobre cuántas inspecciones de control han concluido en intervención.

En el siguiente cuadro se puede ver el número de resoluciones que han declarado la intervención en contraste con el número de resoluciones que levantan esta medida; siendo únicamente en el año 2013 donde se han emitido más resoluciones de levantamiento de intervención.

TABLA 2

Declaración de Intervención Vs. Levantamiento de Intervención

DECLARACIÓN DE INTERVENCION VS. LEVANTAMIENTO DE INTERVENCION AÑO 2013-2016		
PERIODO	INTERVENCIONES	LEVANTAMIENTOS
2013	48	63
2014	54	28
2015	62	39
2016	55	27
	219	157



Elaboración propia

2.2 El carácter correctivo y temporal de la Intervención

La medida de intervención tiene el carácter correctivo ya que busca enmendar las irregularidades que determinaron su aplicación. Como se ha visto anteriormente esta

medida “procura el mantenimiento del patrimonio de la compañía y evita que se ocasionen perjuicios a los socios, accionista o terceros.

A continuación se detalla un gráfico en el cual se demuestra cual es el número de causal más utilizado, es importante señalar que para la declarar la intervención en ciertas compañías se ha establecido más de una causal, he tomado información desde el año 2013 al 2016.

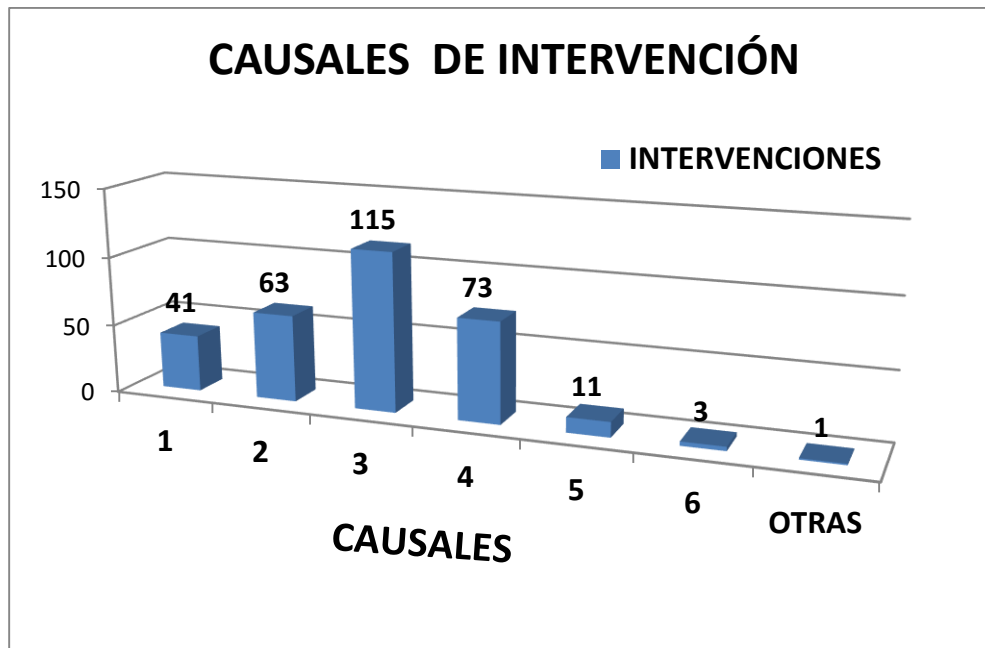
TABLA3

Causales de Intervención

CAUSALES DE INTERVENCIÓN	
CASUALES	INTERVENCIONES
1. Si lo solicitare uno o más accionistas o socios que representen cuando menos el diez por ciento del capital pagado de la compañía, manifestando que han sufrido o se hallan en riesgo de sufrir grave perjuicio por incumplimiento o violación de la Ley, sus reglamentos o el estatuto de la compañía, en que hubieren incurrido ésta o sus administradores.	41
2. Si se comprobare, ante denuncia de parte interesada o de oficio, que en la contabilidad de la compañía se han ocultado activos o pasivos o se ha incurrido en falsedades u otras irregularidades graves, y que estos hechos pudieren generar perjuicios para los socios, accionistas o terceros.	63
3. Si requerida la compañía por la Superintendencia para presentar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias o documentos y comprobantes necesarios para determinar la situación financiera de la compañía, no lo hiciere, y hubiere motivos para temer que con su renuencia trate de encubrir una situación económica o financiera que implique graves riesgos para sus accionistas, socios o terceros;	115
4. Si una compañía recurriere a cualquier forma de invitación pública para obtener dinero de terceros a base de planes, sorteos, promesas u ofertas generales de venta, entrega o construcción de bienes muebles o inmuebles, o suministro de préstamos, cuando no hubiere garantías suficientes para respaldar los dineros recibidos y tal situación implicare graves riesgos para terceros, o cuando efectuaren una oferta pública de valores, sin cumplir con los requisitos señalados en la Ley de Mercado de Valore	73
5. Cuando la compañía se encontrare en cualquiera de los casos referidos en los artículos 325 o 432 inciso cuarto, de esta Ley.	11
6. Cuando se hubieren incumplido por dos o más años seguidos las obligaciones constantes en el artículo 131 y en los dos últimos incisos del artículo 263 de esta Ley.	3

OTRAS

1



Elaboración propia

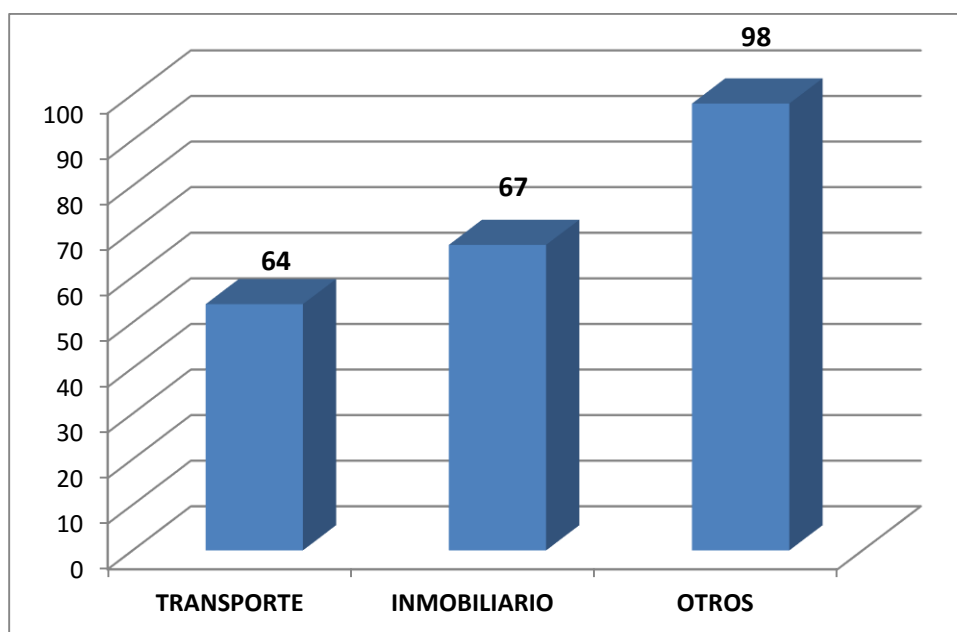
De acuerdo a los datos obtenidos, se puede evidenciar que la causal número tres del artículo trescientos cincuenta y cuatro de la Ley de Compañías es la de mayor aplicación; sin embargo, con el fin de dar una corrección total a la compañía, se establece en los informes contable y jurídico, más de dos causales, debidamente motivadas para la aplicación de la intervención

Adicionalmente es importante mencionar, que de acuerdo a la información de las compañías que se encuentran intervenidas por parte de la Intendencia Regional de Quito, se ha podido establecer que aquellas que se dedican al transporte, a las actividades inmobiliarias; y las compañías de carácter familiar, independiente de su objeto social, tienen mayor conflictividad societaria, por lo que tienden a ser declaradas en intervención, por el ente de control, con el fin de corregir sus irregularidades.

TABLA 4

Compañías intervenidas según su objeto social año 2013-2016

COMPAÑÍAS INTERVENIDAS SEGÚN SU OBJETO SOCIAL AÑO 2013-2016	
TRANSPORTE	54
INMOBILIARIO	67
OTROS	98



Elaboración propia

En las compañías de transporte se produce la conflictividad societaria por el manejo a través de un número reducido de socios o accionistas mayoritarios que tienen el gobierno total de la compañía, por lo que los socios o accionistas minoritarios se encuentran atados a las resoluciones que se toman en asamblea, y el órgano de administración (que siempre tiene afinidad a la mayoría), y se somete a las resoluciones adoptadas; es por esto que la minoría presentan denuncia que concluyen generalmente en intervención.

Por otro lado en las compañías dedicadas a la actividad inmobiliaria a partir de los fraudes económicos que se evidenciaron en el año 2012, la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros comenzó a declarar de oficio la intervención a dichas compañías; incluso en muchos casos al no evidenciar la subsanación de las observaciones que generaron la intervención, se ha procedido a declarar de igual forma de oficio la disolución designando un liquidador, desplazándose al órgano de administración.

Por otro lado, el artículo primero del Reglamento de Intervención establece que la medida administrativa de intervención tiene el *carácter de temporal*, ya que debe durar el tiempo necesario para subsanar las observaciones que generaron la aplicación de la misma, el tiempo de duración dependerá en lo que demore la sociedad en superarlas.⁸⁴

Sin embargo que una compañía mantenga por un tiempo prolongado la intervención acarrearía a una afectación económica que podría desencadenar en la disolución, desnaturalizando a esta medida. Por lo que es necesario que se establezca en la ley o el reglamento un tiempo de duración donde se señale un plazo máximo, estableciendo tiempos graduales de conformidad con la gravedad de las observaciones que motivaron la intervención.

No obstante, dentro de los datos recabados en la Intendencia Regional de Quito, se encontró compañías que soportaban por más de cinco años la intervención, habiendo un caso excepcional de una compañía que se encontraba intervenida por ocho años. Dicha compañía se mantenía en intervención, a pesar de los sendos informes presentados por el interventor en los que sugería la disolución de la compañía; ya que tenía obligaciones pendientes con diferentes instituciones del sector público.

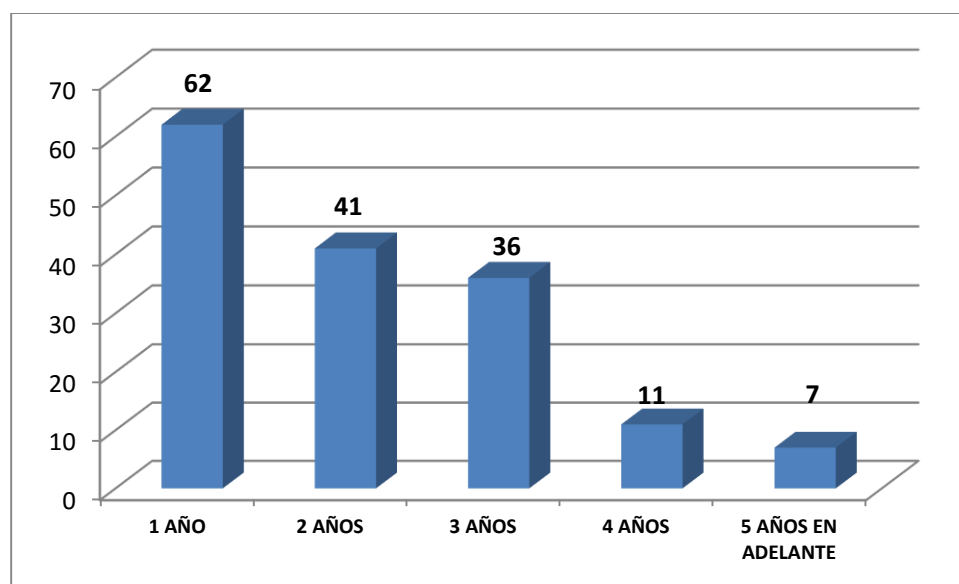
Para determinar el tiempo que generalmente dura una compañía intervenida, se tomó información de las resoluciones de levantamiento de intervención desde el año 2015 y 2016, se detalla a continuación.

⁸⁴Andrés Ortiz Herbener, La Intervención Societaria, Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, No. 2005/18. pág. 350

TABLA 5

Tiempo de duración de intervención

TIEMPO DE DURACIÓN DE INTERVENCIÓN AÑO 2013-2016	
1 AÑO	62
2 AÑOS	41
3 AÑOS	36
4 AÑOS	11
5 AÑOS EN ADELANTE	7



Elaboración propia

En la legislación argentina, como se analizó en el capítulo anterior, la intervención societaria se declara por vía judicial, por lo cual el artículo 115 de la Ley 19550 le da la facultad al juez para que señale el tiempo de duración de la intervención. En dicha legislación no se establecen parámetros para determinar el término a conceder, pero si se señala que para prorrogar el tiempo concedido a través de información sumaria de su necesidad.⁸⁵

⁸⁵Argentina, *Ley de Sociedades 19550*, Artículo 115 - Clases. La intervención puede consistir en la designación de un mero veedor, de uno o varios coadministradores, o de uno o varios administradores. //

2.3 El desuso de métodos alternativos de solución de conflictos societarios

Los métodos alternativos conocidos como la conciliación y mediación son “modos pacíficos de prevención, gestión y solución de conflictos, diversos al litigio que se sustancia por ante el Poder Judicial.”⁸⁶

Su aplicación se da en materias transables, entre sus características se puede nombrar la voluntariedad de las partes, la agilidad, la eficacia con la que se puede dar solución a los conflictos; y, “la confidencialidad, excepto dispensa de la parte interesada, minimizándose así las posibilidades de divulgación pública de informaciones y de situaciones que corresponde a la esfera privada de los negocios y de las personas.”⁸⁷

Con base a lo manifestado es importante aclarar ciertos conceptos que a continuación se detallan, por cuanto en doctrina la conciliación y la mediación se distinguen para la Ley de Arbitraje y Mediación se han establecido como sinónimos:

1. *La conciliación* “es una forma simple de lograr un acuerdo sobre una controversia, es voluntaria, de autocomposición, las partes son quienes tienen el control del proceso y de la solución.”⁸⁸
2. *La mediación* “es un sistema informal mediante el cual una persona neutral, el mediador, procura el acercamiento de los disputantes, el restablecimiento de las comunicaciones entre los mismos, la identificación de los factores determinantes

Misión. Atribuciones. El juez fijará la misión que deberán cumplir y las atribuciones que les asigne de acuerdo con sus funciones, sin poder ser mayores que las otorgadas a los administradores por esta ley o el contrato social. Precisaré el término de la intervención, el que solo puede ser prorrogado mediante información sumaria de su necesidad.

⁸⁶ Teresa M. Mariño y Busquet, “Los métodos alternativos al litigio como instrumento adecuado para la gestión y resolución de conflictos en las empresas de familia”, en Eduardo M. Favier Dubois, *Tipología y Propuesta de Abordaje en Negociación, Mediación y arbitraje en la empresa familiar* (Buenos Aires, 2012), 443

⁸⁷ *Ibíd.*

⁸⁸ *Ibíd.*, pág. 445

de las diferencias y la búsqueda de los intereses comunes de las partes que pudieran facilitar la solución pacífica del conflicto.⁸⁹

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como principal ente de control en el ámbito societario, creó en el año 2008 centros de mediación para que en el ámbito de su competencia, puedan ofrecer a las compañías sujetas a su control, a los socios o accionistas, administradores; y, a terceros la utilización de este medio alternativo de solución de conflictos.

El objeto de la creación de estos centros de mediación fue contribuir a la solución pacífica de los conflictos societarios, para lo cual se promovió la utilización de este procedimiento, únicamente en las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; estableciéndose que no son susceptibles de mediación “los hechos que comporten prohibiciones legales, omisiones, cometimiento de irregularidades por incumplimiento de leyes, reglamentos u otras normas.”⁹⁰

Con base a lo mencionado, en el mismo año 2008 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dictó el Reglamento para la recepción y trámite de denuncias; en el cual, en el artículo 9⁹¹ se dio la posibilidad para que en caso de

⁸⁹Carlos A. Molina Sandoval, “Aspectos Prácticos de la impugnación Asamblearia: Trámite aplicable, arbitraje y otros métodos alternativos de solución de controversias” en Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica Derecho Comercial y de las Obligaciones No. 37 (Buenos Aires, 2004-):217

⁹⁰ Ecuador, *Reglamento de creación y funcionamiento de centros de mediación de la Superintendencia de Compañías*, en Registro Oficial No. 497 (30 de diciembre de 2008), Art. 9

⁹¹Ecuador, *Reglamento de creación y funcionamiento de centros de mediación de la Superintendencia de Compañías* Art. 9. de la mediación.- Declarada la procedibilidad de la denuncia y su calificación, una vez reconocidas las firmas y rúbricas del denunciante que se haya pronunciado favorablemente por la mediación, los secretarios generales de las oficinas de Quito o de Guayaquil, o el funcionario que haga sus veces en las demás intendencias o delegaciones, remitirán el expedientillo de la denuncia al Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías, para que el funcionario responsable de dicho centro se pronuncie sobre si los hechos materia de la denuncia son o no susceptibles de solución a través del procedimiento de mediación, bien entendido que no son susceptibles de mediación hechos que comporten prohibiciones legales, omisiones, cometimiento de irregularidades por incumplimiento de leyes, reglamentos u otras normas.-/ En caso que el pronunciamiento sea concluyente en que los hechos materia de la denuncia no son susceptibles de mediación, informará tal pronunciamiento, según corresponda a los secretarios generales de las oficinas de Quito o de Guayaquil, o al funcionario que haga sus veces en las demás intendencias o delegaciones, remitiendo todo lo actuado, para que prosiga el trámite de la denuncia conforme lo preceptuado en el presente reglamento.-/ Si por el contrario, los

denuncia, la parte denunciante pueda acogerse a la mediación una vez que se haya admitido a trámite la denuncia y que exista el pronunciamiento por parte del responsable del centro de mediación, de que los hechos denunciados son susceptibles de acogerse a este procedimiento.

No obstante en el año 2012 se dio una reforma al Reglamento de Denuncias, en el cual se derogó el artículo 9 que daba la posibilidad de utilizar este método alternativo de solución de conflictos como un paso previo a iniciar el proceso administrativo de denuncia; por lo cual poco a poco se ha dejado de recurrir a la mediación, llevando así a la máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a disponer a inicios del mes de agosto del 2016, la suspensión de todos los centros de mediación que se crearon a nivel nacional.

Con lo cual todo conflicto y controversia que se dé en el ámbito societario se verá limitado en la utilización de los procedimientos alternativos, dejando de la lado el objetivo institucional que se planteó en el año 2008 la Superintendencia sobre la sustitución de la cultura del litigio y la confrontación por la del diálogo y la concertación.⁹²

hechos denunciados, según el pronunciamiento del funcionario responsable del Centro de Mediación, fueren susceptibles de mediación, informará al Secretario General o funcionario que haga sus veces y procederá de acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento del Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías. Dicho funcionario, en tal caso, hará conocer a la parte denunciada la disposición de la parte denunciante de que el asunto sea sometido al procedimiento de mediación y procurará que las partes lleguen a un acuerdo.-/ Concertado el acuerdo, este en caso de ser total se hará constar en el acta respectiva, la misma que, se archivará con el carácter de confidencial en el Centro de Mediación con lo cual se dará fin al conflicto y por lo tanto al trámite de la denuncia, notificando este hecho al Secretario General o funcionario que haga sus veces, devolviéndole la denuncia y las actuaciones pertinentes a ella, para que proceda a su archivo.-/ En caso de acuerdo parcial este igualmente se hará constar en un acta que se archivará en el Centro de Mediación, con el mismo carácter de confidencial, notificando este hecho al Secretario General o funcionario que haga sus veces, devolviéndole la denuncia y las actuaciones pertinentes a ella, para que prosiga el trámite de la misma en la parte pertinente a la inexistencia de acuerdo entre las partes.-/ Si las partes no llegaren a ningún acuerdo, el funcionario responsable del respectivo Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías, devolverá la denuncia y todo lo actuado al Secretario General o funcionario que haga sus veces, para que continúe con el trámite de la denuncia siguiendo el procedimiento previsto en el presente reglamento.-/ No obstante todo lo indicado, de tratarse de hechos susceptibles de mediación, esta podrá darse en cualquier etapa dentro de la tramitación de una denuncia, aun cuando las partes hubieren renunciado a ella, en cuyo caso se suspenderá el trámite y se enviará el expediente a conocimiento del funcionario responsable del respectivo Centro de Mediación para que se cumpla el procedimiento de mediación.

⁹²Ibíd.

2.4 Posibles soluciones

Previo a analizar las posibles soluciones para la utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos en el derecho societario, es necesario recordar que estos métodos son utilizados por una decisión voluntaria de las partes, principalmente por su celeridad en la solución del conflicto y la especialización de los mediadores o árbitros.

Para que se pueda llevar a cabo el arbitraje en materia societaria es indispensable la expresión de la voluntad de las partes, la cual puede verse reflejada en el estatuto social (cláusula estatutaria), o en compromisos arbitrales (extra estatutaria) que pueden ser adoptados en el mismo momento en que surge la controversia. “En el primer supuesto, su ámbito de aplicación se extiende, en principio a todos los socios, sean o no fundadores, hayan o no intervenido en su constitución, así como a todos los órganos de la sociedad. En el segundo supuesto, si se configura como acuerdo extra-societario y su eficacia se limitará a los firmantes del mismo.”⁹³ Sin embargo acudir al arbitraje representa para los socios o accionistas un procedimiento largo y costoso, por lo cual considero que no sería beneficioso acogerse a este método en caso de conflictividad societaria.

No obstante, la aplicación de la mediación en el ámbito societario, es sin duda un procedimiento beneficioso para las partes, esencialmente en aquellos casos en que estén en juego intereses personales de los socios plenamente disponibles, y no cuando se trate de situaciones jurídicas que afecten intereses no ya personales de un socio, sino que afecten elementos relevantes de la sociedad,⁹⁴ ya que interviene en el proceso un mediador especializado en el área societaria que busca un acercamiento de las partes, dando una solución inmediata y principalmente evitando así un largo y desgastante proceso.

⁹³Felipe Durini Andrade, “La vía arbitral como alternativa para la solución de conflictos societarios en la compañía anónima” en blog<<http://studylib.es/doc/466930/la-v%C3%ADa-arbitral-como-alternativa-para-la-soluci%C3%B3n-de-conf...>>

⁹⁴ María Inmaculada Rodríguez, “Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje” (Editorial Bosch S.A), 163

A pesar de que el acogerse a una mediación en el ámbito societario ha quedado limitada, principalmente por la suspensión del Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros; se puede acudir a otros centros especializados en este medio alternativo autocompositivo. Por otro lado es importante señalar que de acuerdo a las diversas reformas que ha tenido el Reglamento de Denuncias desde el año 2008 (primero dando la posibilidad de acogerse a mediación y posteriormente eliminado esta posibilidad) es evidente que depende de la máxima autoridad que se encuentra al frente del ente de control; por lo cual es muy probable que se retome la mediación, ya que en su momento, si permitió la solución de conflictos societarios y principalmente el asesoramiento de los usuarios dentro del área societaria por el personal capacitado que formaba parte del Centro de Mediación.

Conclusiones

1. Del análisis realizado en esta tesis, se ha podido determinar que la figura legal de intervención societaria debe corregir irregularidades que han sido detectadas por parte del órgano de control, a través de inspecciones; así como proteger los derechos de los socios, accionistas o terceros, así como el patrimonio de la compañía, aplicando el principio de conservación de la empresa.
2. Dentro de la presente investigación, se ha podido establecer que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha venido aplicando esta medida de intervención de manera constante, lo que ha conllevado a perder su carácter de excepcional, desvirtuando así su concepción, llegando a considerarse como una medida sancionadora, tanto para los socios o accionistas mayoritarios como para los administradores, concluyente en la disolución y liquidación de la compañía.
3. Esta tesis ha demostrado que la intervención se acciona contra la sociedad y no contra el representante legal, a pesar de que éste es quien ejecuta los actos que generan la conflictividad societaria. Por lo cual esta medida no modifica atribuciones estatutarias o legales de los administradores; sino que limita sus actuaciones al requerir el visto bueno del interventor designado; ni tampoco obstaculiza el normal funcionamiento de la compañía.
4. La intervención es una medida de carácter temporal que durará el tiempo necesario para resolver las anomalías que generaron su aplicación; sin embargo, se ha visto la necesidad que en nuestra legislación se establezca de manera expresa, un plazo

mínimo y un plazo máximo de aplicación de esta medida, el cual podría ser establecido al momento en que la autoridad, emita la resolución con la que declare la intervención.

5. La conflictividad societaria sucede, tanto en el abuso de los socios o accionistas minoritarios, como en el abuso de los socios o accionistas mayoritarios; cuando el comportamiento de cualquiera de estos dos grupos es contrario al interés social, buscando una satisfacción proporcional del interés particular de cada socio o accionista.
6. Los medios alternativos de solución de conflictos autocompositivos, deberían ser nuevamente utilizados por el órgano de control, como un paso previo al inicio del proceso de intervención, ya que su aplicación permite la solución de un conflicto de manera ágil y principalmente con la asesoría de un tercero especializado en el área societaria.

Recomendaciones

1. La intervención societaria al ser una medida que busca corregir irregularidades detectadas por el órgano de control; es recomendable que se reforme el artículo 353 de la Ley de Compañías, en el cual se establezca la remoción del representante legal de la compañía intervenida y a su vez la designación del interventor como administrador, para que de esta forma se lleve a cabo una verdadera intervención.
2. Al haberse determinado en esta investigación que la declaración de intervención es un acto discrecional por parte de la autoridad, se debería establecer criterios institucionales internos, que permitan de manera uniforme declarar la intervención de una compañía, así como la designación del interventor, y no depender del criterio según el especialista designado, tanto en el área contable como jurídica, con el fin de evitar el abuso en la aplicación de esta medida.
3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 358 de la Ley de Compañías, la intervención es una medida de carácter reservado; no obstante, es necesario precautelar los derechos de terceros, para lo cual es necesario reformar el mencionado artículo, dando la posibilidad de que se conozca únicamente si una compañía está o no intervenida, así como el nombre del interventor.
4. Sería importante que se retome y se difunda por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos, principalmente porque dicho órgano de control, cuenta con las acreditaciones y personal capacitado, para brindar esta alternativa de solución ágil de conflictos a las compañías sujetas a su control y vigilancia; y evitar un proceso largo y desgastante de intervención.
5. Con el fin de retomar la naturaleza de esta medida de intervención como excepcional, y eliminar su errónea concepción de sanción, se debería establecer

una caución para el socio o accionista o tercero que presente la denuncia buscando la declaración de intervención de una compañía. La cuantía de dicha caución se debería fijar bajo dos criterios esenciales: 1. los honorarios del interventor que podrían ser determinados de acuerdo al honorario que perciba ese momento el representante legal de la compañía; y, 2. Los gastos imprescindibles en los que requerirá el interventor que incurra la compañía para corregir las irregularidades que determinaron su designación, siendo principalmente la contratación de patrocinio jurídico y de asesoramiento contable.

6. Para detener la errónea concepción de la medida de intervención, se debería eliminar dicha medida de la legislación ecuatoriana, dejando así el camino abierto para que los socios o accionistas que sospechen que se ha cometido actos ilícitos o faltas graves en la compañía, los cuales les genere graves perjuicios, acudan ante la justicia ordinaria a través de los diferentes recursos legales que la Ley de Compañías ha establecido, dejando abierta la posibilidad de que el Juez que conozca la causa, en caso de evidenciar irregularidades, nombre un administrador judicial, quien pueda promover la acción de responsabilidad contra los administradores.

Bibliografía

Publicaciones

- Cevallos, Víctor. “*Manual de Derecho Mercantil*” 3ª. ed. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador, 2002
- Cruz, Ferrer Juan. “*Apuntes de Derecho Económico: La intervención pública*” Madrid: Dykinson, 1992.
- Dávila, Torres Cesar. “*Ensayos sobre Derecho Mercantil*” Quito: Editorial Universitaria Quito, 1980
- Giovenco Arturo C., “*Conflicto Societario. Tipología y Propuesta de Abordaje en Negociación, Mediación y Arbitraje en la empresa familiar*” Director Eduardo M. FavierDubois Buenos Aires 2012
- Mariño y Busquet Teresa M., “*Los métodos alternativos al litigio como instrumento adecuado para la gestión y resolución de conflictos en las empresas de familia*” en Negociación, Mediación y Arbitraje en la empresa familiar Director Eduardo M. Favier Dubois Buenos Aires 2012
- Molina Sandoval Carlos, “*Problemas que plantea la legitimación pasiva en la intervención societaria*” en Derecho Comercial y de las Obligaciones, Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica año 38 2005-B
- Reyes Villamizar Francisco, “*Derecho Societario Tomo II*” editorial Temis Bogotá – Colombia 2004
- Rodríguez María Inmaculada, “*Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje*” Editorial Bosch S.A., Barcelona 2010
- Rodríguez Olivera Nuri, “*Responsabilidad civil de los administradores de sociedad anónimas*” Editorial Letras, Montevideo 1973
- Roitman Horacio, “*Impugnación a las decisiones asamblearias*” en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones año 17 Nos. 97 a 102 Ediciones Delpalma Buenos Aires 1984

Rovira Alfredo L., “*Interés Societario*” Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma Buenos Aires, 2006

Rovira Alfredo L. “*Pactos de Socios*” Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma Buenos Aires, 2006

Rubio Vicente Pedro J., “*Una aproximación al abuso de minoría en la sociedad anónima*” en Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica año 37 2004-A

Salcedo Castro Myriam, “*El contrato de arbitraje*” Bogotá Legs Editores S.A. 2005 p.114

Salgado Valdez Roberto, “*Tratado de Derecho Empresarial y Societario Tomo V*” *La Regulación y de Control Societarios* Primera Edición, junio 2015

Salgado Valdez Roberto, *Tratado de Derecho Empresarial y Societario Tomo I El Empresario y las Sociedades* Primera Edición junio 2015

Salgado Valdez Roberto, “*La Sociedad de Responsabilidad Limitada en el Ecuador*” Publicaciones Tercer Mundo Editorial 1982

Salgado Valdez Roberto, “*Tratado de Derecho Empresarial y Societario Tomo II La Sociedad Anónima*” Primera Edición, junio 2015

Zannoni Eduardo A, “*Intervención Judicial de Sociedades solicitada por terceros*” jurisprudencia anotada en Derecho Comercial y de las Obligaciones, Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica año 15 no. 85- 90 Depalma Buenos Aires, 1982

Linkografía

Caizahuano Roberto, “Intervención administrativa a las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías”, Revista de Derecho Societario No. 6, pág. 56 en blog <http://aedssite.com/revista/autores_2.html> consulta 28/10/2016

Durini Andrade Felipe, La vía arbitral como alternativa para la solución de conflictos societarios en la compañía anónima en blog <<http://studylib.es/doc/466930/la->

v%C3%ADa-arbitral-como-alternativa-para-la-soluci%C3%B3n>consulta
28/10/2016

Echaiz Moreno, Daniel. Análisis crítico de la ley general de sociedades a once años de su vigencia. Lima, PE: B - Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. Edición electrónica

Farrán Farriol Josep , “*La responsabilidad de los administradores en la administración societaria*”, (Barcelona, 2004) edición electrónica

Lozano García María Belén, Hidalgo Alberto de Miguel; y, García Julio Pindado “*El conflicto accionista–directivo: problemas y propuestas de solución*”, en blog <<http://www.revistasice.com/>>

Llebaría Samper Sergio y Núria Ginés Castellet, “*Derecho de sociedades*”, t. I (Barcelona, 2008) edición electrónica

Ortiz, Herbener Andrés, “*La Intervención Societaria*” en blog de Revista Jurídica <http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=21&Itemid=38> consulta 28/10/2016

Romero, Parducci Emilio. “*Los destinos de las utilidades anuales de una compañía anónima y las posibles intervenciones de las minorías*”, en Revista de Derecho Societario No. 2, <http://aedssite.com/revista/autores_2.html> consulta 29/03/2015

Ton, Walter Rubén, “*La Intervención Societaria previa vista a la Sociedad*”, IX Congreso Argentino de Derecho Societario – V Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Tucumán: 2004 en <<http://congresods.uade.edu.ar/greenstone/collect/congres1/archives/HASH0165/5e649c88.dir/doc.pdf>> consulta 28/10/2016

Velásquez Restrepo Carlos, “*Sobre el abuso del derecho en materia de sociedades*” pág. 11 en blog <<https://www.carlosavelasquez.com/descargas/sobre-el-abuso-del-derecho-en-materia-de-sociedades>> consulta 28/10/2016

Normativa

Argentina, Ley de Sociedades Comerciales

Colombia, Código de Comercio.

España, Ley de Sociedades de Capital.

Constitución de la República del Ecuador.

Ecuador, Código Orgánico General de Procesos.

Ecuador, Código Tributario.

Ecuador, Ley de Compañías, en Registro Oficial No. 312, Quito, 05 de noviembre de 1999, última reforma 22 de mayo de 2016

Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías

Reglamento de creación y funcionamiento de centros de mediación de la Superintendencia de Compañías

Reglamento de Denuncias

Resolución Superintendencia de Compañías 12 Fijación de montos de activos para contratar auditoría externa , en Registro Oficial No. 621 (18 de julio de 2002)

Tablas

Tabla 1 Número de Denuncias que han concluido en Intervención

Tabla 2 Declaración de Intervención Vs. Levantamiento de Intervención

Tabla 3 Causales de Intervención

Tabla 4 Compañías Intervenidas según su Objeto Social

Tabla 5 Tiempo de duración de la medida en compañías intervenidas

Figuras

Figura 1 Proceso de Intervención